



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**



TESIS:

Inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales Chiclayo 2019

Autor:

Bach. Manayalle Carrero Kevin Edmundo

Asesor:

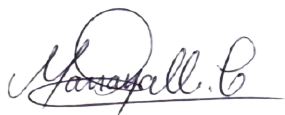
Mag. Vargas Rodríguez César

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de Sustentación: 13 de enero del 2022

LAMBAYEQUE, 2022

Tesis denominada “Inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales Chiclayo 2019” presentada para optar el TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO, por:



.....
Bach. Manayalle Carrero Kevin Edmundo
Autor

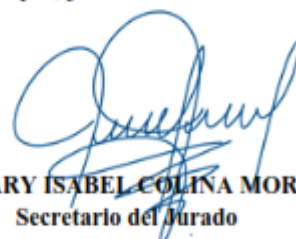


Abog. CESAR VARGAS RODRÍGUEZ
Asesor

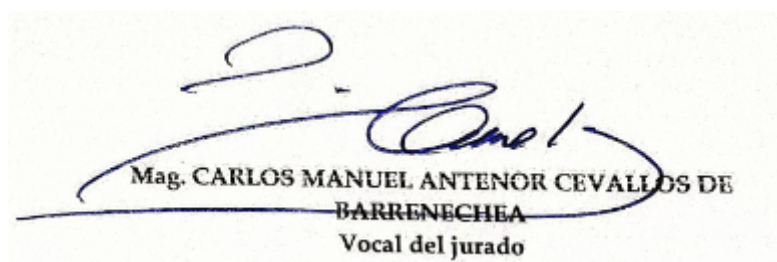
APROBADO POR:



Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA
Vocal del jurado

DEDICATORIA

A mis padres por haberme enseñado con el ejemplo que con esfuerzo y dedicación las metas se pueden lograr, y por su motivación constante para crecer como profesional y sobretodo como persona.

AGRADECIMIENTO

A Dios que siempre ha estado a mi lado dándome aliento ante los momentos adversos y guiándome en cada paso que doy en mi formación profesional y humana. A mi alma máter, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a la que con sacrificio logré ingresar y que con satisfacción he logrado culminar mis estudios. A mis profesores, quienes durante seis años con gran desprendimiento compartieron sus conocimientos para formarnos como profesionales competentes y también por habernos brindado enseñanzas para la vida personal.

INDICE

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÒGICOS	
I. ASPECTOS METODOLOGICOS	9
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	9
1.1. Planteamiento del problema	9
1.2. Formulación del problema	12
1.3. Justificación e importancia del estudio	12
1.4. Objetivos	13
1.4.1. General	13
1.4.2. Específicos	14
1.5. Hipótesis	14
1.6. Variables	14
1.7. Población y Muestra	14
1.8. Métodos técnicas e instrumentos de recolección de datos.	14
1.9. Análisis estadísticos de los datos.	15
1.9.1. Criterios éticos	15
1.9.2. Criterios de rigor científico	15
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL	
2.1. Antecedentes de la investigación	16
2.2. Inoperatividad del Agente Especial	17
2.2.1. El agente especial	17
2.2.2. Diferencias con el agente encubierto	19

2.2.3.	Actividades que realiza el agente especial _____	25
2.2.4.	El agente especial y el ordenamiento jurídico nacional _____	26
2.2.5.	Los agentes especiales y su atribución en los delitos _____	27
2.3.	Infiltración en las Organizaciones criminales _____	27
2.3.1.	La infiltración como técnica de investigación _____	27
2.3.2.	La infiltración y los agentes especiales _____	29
2.3.3.	Las técnicas especiales de investigación _____	31
2.3.4.	La capacidad de infiltración del agente especial en las organizaciones criminales y la habilitación de la exención de la responsabilidad penal. _____	33
2.3.5.	El delito de organización criminal (art. 317 del CP) _____	34
2.3.6.	La pertenencia a una organización criminal _____	37
2.3.7.	La organización criminal _____	41
2.3.8.	Organización criminal, en las limitaciones de sus características _____	47
2.3.9.	Bien Jurídico Protegido _____	51
2.3.10.	De los delitos de asociación para delinquir a la participación en organización criminal de la administración pública. _____	53
2.3.11.	Limitación de la función encubierta a casos de actividades propias de la delincuencia organizada _____	55
CAPITULO III: RESULTADOS _____		
3.1.	RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS. _____	
3.1.1.	Presentación de los resultados. _____	58
CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS _____		
V. CONCLUSIONES _____		
VI. RECOMENDACIONES _____		
BIBLIOGRAFIA _____		

RESUMEN

La presente investigación requiere analizar la inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales, teniendo en cuenta que el agente encubierto es la denominación que se le da al método de investigación usada con la finalidad de impedir la comisión de los delitos contra la administración pública, siendo que las leyes se centran en combatir el crimen organizado cuya comisión aumenta y se perfecciona por todo el mundo, no conociendo de barrera alguna para que sus consecuencias se detengan, por ello se plantea la pregunta: ¿Qué efectos jurídicos surgen en función a la inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales?, verificando su desarrollo en la doctrina, jurisprudencia, marco legislativo nacional e internacional, para su adecuada regulación, operatividad en la legislación y en el sistema judicial nacional, se plantea como objetivo determinar qué efectos jurídicos surgen en función a la inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales, sin embargo, debido a la necesidad del agente encubierto, queda por determinar si este es un sujeto imprescindible para disminuir la criminalidad organizada en el mundo y si es que resulta recomendable una adecuada e inflexible regulación normativa del agente encubierto a fin de que no se produzcan participaciones ilícitas para luego establecer el nivel de responsabilidad que el Estado asume frente a delitos cometidos por el agente encubierto en el ejercicio de sus funciones.

Palabras Clave: *Agente especial, organizaciones criminales, infiltración, inoperatividad*

ABSTRACT

This investigation requires analyzing the inoperability of the special agent to carry out infiltration work within criminal organizations, taking into account that the undercover agent is the name given to the investigation method used in order to prevent the commission of crimes against the public administration, since the laws focus on combating organized crime whose commission increases and is perfected throughout the world, not knowing of any barrier so that its consequences are stopped, therefore the question arises: What legal effects arise as a function of the inoperability of the special agent to carry out infiltration work within criminal organizations ?, verifying its development in the doctrine, jurisprudence, national and international legislative framework, for its adequate regulation, operation in the legislation and in the judicial system national objective, the objective is to determine what legal effects arise due to the inoperability of the special agent to carry out infiltration work inside criminal organizations, however, due to the need for the undercover agent, it remains to be determined if this is an essential subject to reduce organized crime in the world and If it is advisable to have an adequate and inflexible normative regulation of the undercover agent so that illicit participation does not take place and then establish the level of responsibility that the State assumes in the face of crimes committed by the undercover agent in the exercise of their functions.

Keywords: *special agent, criminal organization, infiltration, inoperability*

CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS

I. ASPECTOS METODOLOGICOS.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

1.1. Planteamiento del problema.

Los actos de representantes especiales como funcionarios, agentes y personas legalmente autorizadas para actuar como confidentes calificados en relación con el Código de Procedimiento Penal brindan información relevante para la investigación, sujeta a los principios de presentación ante el Fiscal, pero hay una prohibición por parte de Die Liability de estos agentes para las investigaciones que llevan a cabo con organizaciones criminales.

Como consecuencia directa de esta prohibición, ocasiona la incapacidad del agente especial para realizar trabajos encubiertos dentro de organizaciones criminales, ya que la actividad inevitablemente implica la comisión de actos ilegales compatibles con las actividades de la organización encubierta.

No debe olvidarse que existe una diferencia entre el agente especial y el agente encubierto, mientras que el agente secreto es un acto de investigación especial aprobado por el fiscal, sujeto al caso en el que un agente especial se infiltra a una organización criminal con su identidad. Apunta a definir su estructura e identificar a sus líderes, miembros, recursos, métodos de trabajo y relaciones con otras organizaciones criminales.

El agente secreto es el nombre de la técnica de investigación especial

utilizada para combatir el crimen organizado. Por lo tanto, es importante entender cómo comienza toda esta policía criminal, porque la ley se centra en la lucha contra el crimen organizado. La comisión aumenta y mejora por todos, porque no tiene obstáculo para detener las consecuencias.

Por lo tanto, el tema que vamos a analizar se desarrolla como un medio de investigación porque se inserta en la organización criminal. Esto subraya que su rendimiento es relevante porque los sistemas tradicionales no han logrado resultados óptimos y se están volviendo ineficaces de usar. Esto es tanto más cierto ya que estos sujetos organizados usan el secreto y el gran arte de borrar sus huellas para mantener la impunidad en sus actividades.

Dadas las descripciones normativas y doctrinales, se deduce de lo anterior que la organización criminal consiste en dos o más personas que se han unido para cometer delitos con el objetivo de permanecer más tiempo y hacer el trabajo. Cada miembro es detallado y específico. Tiene éxito dada su importancia territorial y demuestra la compleja estructura criminal que utiliza procedimientos de planificación con un sistema de control de riesgos adecuado para evitar ser detectado en sus actos ilegales.

Las técnicas de investigación especiales más efectivas y ampliamente utilizadas en la lucha contra el crimen organizado son: intervención de comunicación, entrega vigilada o controlada, agente encubierto, denunciante o colaborador y agente de detección. Por lo tanto, la ley peruana prevé seis técnicas especiales de investigación, a saber, la interceptación de correo, la interceptación de comunicaciones, el movimiento y la transmisión controlada de propiedad criminal, la videovigilancia, la vigilancia y el agente encubierto.

En el pasado, la organización criminal se consideraba una amenaza muy compleja, ya que los grupos criminales diversificaron sus actividades con

diversos productos y / o servicios de los sectores público y privado y constituyeron una red criminal completa. Al examinar los inicios de estas organizaciones, descubrimos que el modelo principal era el del "padrino", y se descubrió que todas las actividades criminales del grupo se llevan a cabo en una estructura jerárquica con una única dirección de comando que controla un mercado en particular.

Por ejemplo, tenemos el trabajo del japonés Yakuza, que según las Naciones Unidas se ocupa del tráfico de drogas, las redes de prostitución, el tráfico de armas y se especializa en corrupción. Esto significa que, si las empresas se movilizan para llenar los vacíos en el mercado de productos, siempre surgirán nuevos grupos del crimen organizado siempre que puedan obtener ganancias.

Debido a las necesidades del agente encubierto, queda por ver si este es un problema clave para reducir la delincuencia organizada en todo el mundo y si es aconsejable proporcionar una regulación adecuada e inflexible de esta técnica especial de investigación a fin de garantizar el correcto ejercicio de sus funciones y proteger al Estado de responsabilidades por actos ilícitos del agente en cubierto. Este oficial está exento de toda responsabilidad penal por los delitos que sean necesarios para acelerar el desarrollo de su investigación. Su supuesta identidad le permite llevar a cabo acciones legales perfectamente válidas tanto en el campo de la investigación como en sus relaciones sociales o en los Estados Unidos.

En la presente investigación, se puede demostrar que la exención de la responsabilidad penal de los agentes especializados contra los delitos de delincuencia organizada, cuando el sistema de justicia penal no los protege con las garantías del caso en el que se comprueba que El agente encubierto es el caso que se ocupa de la investigación especial del fiscal.

Estado para poder introducir en secreto un agente de investigación

criminal en la organización criminal o para autorizar ciertos activos criminales o envíos ilegales para circular dentro o fuera del territorio nacional sin autoridad o sus agentes y bajo cuya vigilancia entra en juego. Según los autores (Gómez y Herrero, 2006), quienes nos dicen que la infiltración consiste en disfrazar la verdadera identidad para establecer una relación de confianza con el objetivo principal también oculto, obtener la información necesaria para satisfacer ciertas audiencias y / o intereses privados.

El agente encubierto no solo puede restringir los derechos fundamentales cuando los busca o los intercepta por teléfono, sino que también puede restringir los derechos al ingresar a la residencia del sujeto con un consentimiento no válido, lo que también le permite aventurarse en su esfera íntima y privada; o si recibe una conversación o información de la organización criminal.

En el art. 5 de la Ley N ° 28950, publicada el 16 de enero de 2007, que introduce las siguientes modificaciones al art. 341 del CPP, que se establece en el artículo 341 del CPP, establece que, “El fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que está inmerso en una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal”

1.2. Formulación del problema.

¿Existe inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales?

1.3. Justificación e importancia del estudio.

1.3.1. Justificación del estudio.

La investigación es necesaria debido a que se busca una exención de responsabilidad y se puede promover un mejor marco teórico basado en el análisis de la operatividad del agente especial en las organizaciones criminales, verificando su desarrollo en la doctrina, jurisprudencia, marco legislativo nacional e internacional, para su adecuada regulación, operatividad en la legislación y en el sistema judicial nacional.

1.3.2. Importancia del estudio.

La presente investigación busca analizar la intervención que realiza el agente especial frente a los delitos contra la administración pública, por otro lado se encargara de analizar la posibilidad de ex- tender los mecanismos especiales para exención de agentes por responsabilidad penal con el fin de otorgarle mayor funcionalidad en el marco de sus labores de infiltración, función para que además de ser plenamente útil y competente resulta en numerosos casos de trascendental importancia para concretar los fines de la investigación preparatoria, sin embargo existe una prohibición de la responsabilidad de dichos agentes frente a la investigación que realizan en función a las organizaciones criminales.

1.4. Objetivos.

1.4.1. Objetivo General.

Determinar si existe inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales.

1.4.2. Objetivos Específicos.

1. Identificar en qué circunstancias se efectúa la inoperatividad del agente especial dentro de las organizaciones criminales en la Administración pública.
2. Analizar doctrinal, legislativa y jurisprudencialmente la figura del agente especial y su eximente de responsabilidad penal en la legislación peruana.
3. Proponer una mejora de actuación del agente especial, cumpliendo los criterios de excepción de responsabilidad penal por cumplimiento de su función.

1.5. Hipótesis.

Si existe inoperatividad del agente especial en las organizaciones criminales, entonces, se podrá buscar mejorar la actuación de dichos agentes y a la vez asegurar su excepción de responsabilidad penal en el ejercicio de su función.

1.6. Variables.

1.6.1. Variable independiente.

Agente especial

1.6.2. Variable dependiente.

Organizaciones criminales

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.7.1. Métodos.

1.7.1.1. Métodos generales.

- El Método Inductivo.

Parte del especial para lograr lo general. Análisis caso por caso sobre un tema de investigación.

- El Método Deductivo.

Inicia en lo general para poder culminar con lo especial.

1.7.1.2. Métodos específicos.

- El Método de la observación.
- El Método experimental.
- El Método estadístico

1.7.2. Técnicas.

- Encuesta. - Se empleará un cuestionario, el cual será ser aplicado a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales y Abogados penalistas del Distrito Judicial de Lambayeque.

1.7.3. Instrumentos.

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

Cuestionario. - Esta herramienta se utilizará en técnicas de encuestas y se aplicara para recopilar información de opinión de expertos en Derecho Penal, de los cuales se incluirán ejemplos aleatorios.

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes de la investigación

Internacional

Collantes (2014), expreso en su conclusión que cuando se habla de crimen organizado, se considere grupos grandes y bien organizados. Sin embargo, la mayoría de las veces hay grupos que no incluyen más de cinco personas dedicadas a delitos menores. Sin embargo, si profundiza su estructura, verá una preparación detallada, una gran cantidad de delitos en poco tiempo, etc. En este caso, lo que estamos enfrentando es una clara manifestación del crimen organizado, pero una simple combinación de un grupo de personas que se unen para cometer delitos. Suele ser un grupo social con cierta estructura y sus miembros son el crimen organizado.

De la cruz (2017), En esta investigación, observamos que la ONU ha reiterado en diversos foros la necesidad de empoderar a las fuerzas del orden para aumentar su efectividad sin comprometer el respeto a los derechos humanos y el establecimiento de métodos de vigilancia basados en tecnología electrónica y de telecomunicaciones y su implementación de fondos de rastreo como un nuevo método.

Galindo (2013), establece que el mayor éxito del plan es que la cooperación ha sido y se sigue planificando, y que México y Estados Unidos finalmente entienden que los logros personales nunca serán suficientes para resolver problemas que traspasan las fronteras nacionales. Un problema global, este es un problema de crimen organizado transnacional que afecta más o menos a todas las comunidades del planeta.

Nacional

Diban (2014), Se refiere a las mejores prácticas y recomendaciones con respecto a los obstáculos legales para las entregas controladas y las operaciones encubiertas, además de la posibilidad de infiltrarse en agentes que cometen ciertos delitos dentro de parámetros definidos. Bajo el sistema legal actual, esto se puede lograr: excepciones específicas en la legislación; según el precedente, el agente no tiene la intención, enseñanza o pautas necesarias para cometer el delito.

Zamora (2017), establece que el agente encubierto que se infiltra en una organización y tiene contactos con personas que están comprometidas a cometer delitos para encontrarlos y procesarlos, con dos cosas básicas a tener en cuenta.

Prado (2015), afirma que los problemas de dogma criminal identificados en el enfoque de la doctrina nacional y la jurisprudencia sobre el crimen organizado fueron causados principalmente por la definición del alcance normativo del artículo 317 del Código Penal y las circunstancias agravantes específicas.

2.2. Inoperatividad del Agente Especial

2.2.1. El agente especial

Los agentes especiales son miembros de organizaciones criminales o ciudadanos que no son miembros de la sociedad criminal. Mantiene una relación de privilegio con la organización porque conoce las actividades de la organización o porque participó personalmente, sin ser parte de la organización, en la comisión de delitos de la organización o por alguno de sus miembros (Gálvez, 2017).

Dado que debes obtener la autorización legal del ciudadano para ser un confidente calificado (Pérez, 2013, p. 164), para proporcionar información relevante para la investigación o para llevar a cabo un trabajo de investigación, sujeto a los principios de presentación al fiscal (artículo 341.1 del CPP), la prohibición de la provocación criminal (art. 341.7 del CPP) y la prohibición de una violación arbitraria de los derechos fundamentales (art. 314.5 del CPP), cuyo objetivo es garantizar la legalidad de las pruebas obtenidas en el marco de la evidencia obtenida por el trabajo de investigación del agente especial.

Cabe señalar que el agente especial debe distinguirse del confidente o informante ordinario, porque se define como una persona perteneciente a un grupo delictivo que brinda información por iniciativa propia o previa solicitud. Fuerzas armadas y agencias armadas. En la primera seguridad extraprocesal del procedimiento policial, no se rige por fines desinteresados, sino que por el contrario se intercambia por intereses económicos o procesales.

Por tanto, los ordinarios o informantes que brindan información se caracterizan por ocultar sus identidades y no participar en las audiencias como testigos, lo que se traduce en un uso restringido del tema (Plancheadell, 2016).

En el Recurso de Nulidad N° 3020-2015/Junín, en su fundamento décimo cuarto y décimo quinto, se hace referencia sobre la estrategia policial se centra en la lucha contra el crimen organizado, la inclusión de informantes e informantes, las personas que brindan información e interés en el crimen, el autor del crimen o el mundo que los rodean para aclarar el delito penal. Por cierto, el informante está registrado en una policía nacional y recibe una compensación a cambio. NT Lattu, el informante es un ciudadano que por alguna razón ofrece la información relevante al oficial de policía para detectar el crimen; Y tanto los informantes como los creyentes nunca están participando en esta operación, simplemente proporcionan información.

Asimismo, en la sentencia de la Sala Constitucional remitida en enero de dos mil ocho, el expediente núm. 4750-2007-PHC / TC, se dice que el agente intervino para incitar o inducir al perpetrador a cometer el delito. Y su acción determina si una o

más personas cometen un delito que no tenían previamente. propuesto para realizar, o si no han comenzado a prepararse para ello. En este caso, el conocimiento y el deseo de orientar la conducta hacia la comisión del delito surge de la persona del perpetrador involucrado en el crimen organizado, no del agente encubierto. Esto conduce al crimen.

Para Teresa Molina Pérez, en el acto de provocación, hay tres notas que distinguen esta categoría: i) El elemento objetivo, representado por la provocación del agente provocador, debe dar este paso, resultando en una solución criminal. La persona correcta. ii) Un elemento subjetivo, representado por la conducta del agente provocador, que busca lograr un fin diferente al que comúnmente persiguen todos los infractores, que es el castigo del provocador. iii) Se deben tomar todas las precauciones apropiadas para evitar que el agente provocador logre el resultado deseado. (Perez, 2008)

El delito provocado es el resultado de la actividad de un agente o empleado de la Policía Nacional del Perú o de un ciudadano que, guiado por la intención de arrestar a los sospechosos, induce a cometer un delito a alguien que no tenía intención previa de cometer un delito. Cometer un crimen. El presidente del Tribunal Supremo, César San Martín Castro, dice del delito cometido que la verdadera causa de la actividad delictiva radica en los errores, ya que el autor del delito controla todos los iter criminis desde la etapa de redacción hasta la ejecución. (Castro, 2016).

2.2.2. Diferencias con el agente encubierto

Es este método de investigación especial que se utiliza para insertar secretamente a un oficial de policía en una organización criminal para obtener información precisa sobre su composición, el método o procedimiento del crimen, el personal involucrado y los recursos del personal relevante. La capacitación y los recursos son factores importantes para que las autoridades interrumpan y dismantelen este grupo delictivo. El método de búsqueda lo veremos en la siguiente sección.

La necesidad de luchar eficientemente contra la delincuencia organizada ha llevado al uso de métodos nuevos y eficaces, pues, en la práctica, los antiguos métodos de investigación ya no funcionan como se esperaba y el resultado final de la lucha contra la delincuencia organizada es limitado. Las nuevas técnicas de investigación para combatir el crimen organizado, como es el caso del agente encubierto y el agente especial son muy importantes, pues su labor en la investigación es extraordinaria porque tiene contacto directo con los sujetos involucrados. Como núcleo de una organización criminal, y debido a la intensidad de su trabajo, el oficial de policía debe recibir protección para proteger su seguridad personal.

El agente en cubierto, como técnica especial de investigación, es justificado, toda vez que, según la constitución política del Perú, establece que “el Estado tiene la obligación de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas”. De acuerdo con este presupuesto y la legislación y jurisprudencia citada, el gobierno peruano ha delegado la facultad de enjuiciar a la Fiscalía. La Fiscalía debe trabajar de la mano con la Policía Nacional y los representantes sociales como defensores de la ley, y ambos deben trabajar en estrecha colaboración para verificar los actos de investigación que realiza el agente encubierto.

Hay dos características básicas que definen esencialmente al personal encubierto. Estos son los siguientes:

a. El engaño

El engaño es esencial porque no se puede pensar en un agente encubierto sin una identidad falsa e intenciones falsas. De hecho, el fraude se convierte en el verbo guía del comportamiento del agente encubierto porque primero es necesario darle una identidad falsa con la que pueda presentarse e identificarse en el campo del crimen organizado, lo que construirá relaciones amigable y social a la confianza de todos para ganar miembros de la organización criminal.

El engaño tiene la finalidad de generar un clima de confianza en la organización criminal; y de esta manera, poder identificar y destruir a todos los integrantes de la estructura criminal mediante la recolección de información y fuentes de datos.

Utilizado eficazmente en procesos penales. Obviamente, sin la naturaleza de este engaño, es imposible incluir a un oficial de policía en una organización criminal y, por lo tanto, es imposible investigar el crimen organizado. En ese sentido, el engaño del agente en cubierto está justificado por la confidencialidad, complejidad, modernización y riesgo de delincuencia organizada.

El agente encubierto puede restringir derechos fundamentales, por ejemplo, ingresar al inmueble de un investigado a partir de un consentimiento viciado, permitiendo de esta manera, ingresar a su propio dominio privado e íntimo; asimismo, la falsa identidad le permite al agente en cubierto interceptar conversaciones que le permiten recabar información para los objetivos de la investigación y que, de no haber actuado mediante falsas intenciones, no hubiera conocido tal información; sin embargo, a la vez, vulnera el derecho a la intimidad y la autodeterminación informativa del investigado.

El agente tiene una presunta identidad, la cual se mantendrá durante toda la investigación y durante y después del proceso. Mediante el uso de esta identidad virtual, el sujeto intentará ganarse la confianza de los miembros de la organización en la que se infiltró para realizar investigaciones criminales, encubriendo así sus verdaderas intenciones. De esta forma, el agente engañará cuestiones que tienen mucho que ver con su identidad, el trabajo que realiza y la intención de participar en las actividades de la organización. (Planchadell, 2016, p. 68).

Sin embargo hay algunos autores que ven las posibles vulneraciones a los derechos de los investigados producto del requerimiento de un agente especial o encubierto, como Guzman (2016, p.58) quien critica este tipo de actuaciones fiscales al abrir una gran cantidad de posibilidades de afectación de derechos fundamentales, pues requerir la intervención de estos agentes exige que entre agente e investigado se entable una posible amistad y producto de ellos gane la confianza hasta poder trabajar con ellos interviniendo también en el proceso en las llamadas telefónicas, vulnerando así el secreto de las comunicaciones, intimidad personal, inviolabilidad de domicilio, entre otros. En consecuencia, para el autor, esto conllevaría a un

cuestionamiento de las pruebas obtenidas con el método utilizado por el representante del ministerio público.

Los agentes encubiertos (también conocidos como "secretos") son "personas seleccionadas y capacitadas que ingresan o ingresan a organizaciones criminales proporcionando autoridades competentes (desde adentro) en las llamadas identidades (haciéndose pasar por criminales). Los "agentes secretos" son policías autorizados de alta calidad, accede y oculta su identidad, penetra o ingresa a la organización delictiva o grupo delictivo del participante, para identificar y recabar la información de condena y elementos requeridos para la investigación". El agente encubierto también se llama "oficial encubierto". Cabe señalar que "se requiere al oficial encubierto cuando otros métodos de investigación no pueden extenderse a la persecución de personas que cometen delitos". Este es particularmente el caso cuando estamos expuestos a delitos complejos como crimen organizado.

Según la fiscalía, se supone que los usos del agente encubierto incluyen: "- El oficial de vigilancia encubierto es aquel que recopila información sobre delitos cometidos o cometidos. - Los oficiales de prevención encubiertos son aquellos que actúan para prevenir actividades delictivas o al menos para minimizar el impacto de su comisión. - El rescatista secreto es el que facilita la comisión de un delito. En este caso, el agente encubierto participa en una persona predispuesta a cometer delitos o proporciona activos económicos u otros recursos. Las acciones de este tipo de agente deben definirse y controlarse cuidadosamente, ya que nunca pueden ser una provocación clara del delito."

En Chile, "la herramienta de agente encubierto es utilizada tanto por los carabineros como por la policía de investigación chilena. En este país, la capacitación de agentes dura un promedio de dos años. Las academias de policía son responsables de preparar futuros oficiales encubiertos. En estas escuelas de capacitación, los funcionarios se centran en las características sociales y las habilidades de los futuros agentes encubiertos.

"En situaciones como agentes encubiertos haciéndose pasar por 'DJ', la policía debe aprender a operar el sonómetro, entender a la gente de moda y determinar los códigos para tales reuniones. En Chile," el uso de agentes secretos está combatiendo el crimen organizado, es muy útil en el tráfico de drogas, como los casos que llevaron al colapso de una organización criminal llamada Hell's Angels u operaciones encubiertas que llevaron a una caída selectiva. René Sanabria, jefe de control de drogas de Bolivia, es responsable de coordinar la venta de cocaína. "A su vez, Israel tiene uno de los agentes secretos o sistemas secretos más famosos e importantes del mundo, a saber, el Mossad o el Servicio Secreto israelí. El Mossad utiliza agentes especialmente entrenados para realizar 31 misiones de infiltración.

Estos agentes fueron llamados "katzas" y recibieron dos años de entrenamiento riguroso en la sede del Mossad en Tel Aviv. "El Mossad está reclutando actualmente a 1.200 oficiales. Sin embargo, debido a que la instalación es principalmente responsable de" asegurar la existencia del Estado de Israel", la mayoría de sus operaciones están relacionadas con operaciones internacionales.

Por lo tanto, los oficiales contratados tienen una serie de características que se ajustan esta situación, por ejemplo, "deben poder hablar varios idiomas; también deben tener un perfil psicológico particular". Como ya se mencionó, Mossad es una empresa con actividades fundamentalmente internacionales.

En este sentido, fue para la implementación de operaciones relacionadas con la seguridad del Estado de Israel, Aunque se sabe poco sobre sus actividades debido a su naturaleza ultrasecreta, se han publicado informes sobre sus operaciones más espectaculares, incluido el arresto del ex líder nazi Adolfo Eichmann en Argent L El ex miembro de las SS fue secuestrado por agentes del Mossad y luego trasladado a Israel, donde fue llevado ante la justicia y condenado a muerte.

b. La excepcionalidad o subsidiaridad del engaño

Primero me acerqué y desarrollé el elemento del engaño porque es el que subyace a este nivel restrictivo de derechos, y al mismo tiempo lo hace excepcional, ya que lo aleja de lo ordinario o lo elimina; es decir, técnicas de investigación

convencionales en las que la percepción de la realidad no cambia y la voluntad de las personas examinadas no se ve comprometida por el engaño; alejarse de las reglas del juego limpio.

Por lo tanto, está claro que la naturaleza excepcional de esta medida restrictiva se basa no solo en el hecho de que se utiliza para investigar delitos de delincuencia organizada (como creen algunos autores), sino que también es excepcional porque su práctica implica restringir ciertos derechos fundamentales, por lo tanto, su uso o uso debe ser excepcional. Por esta razón, su subsidiariedad se deriva del hecho de que el uso del agente encubierto solo está justificado si las técnicas de investigación convencionales no pueden cumplir el objetivo de la investigación.

Los principios de proporcionalidad y subsidiariedad deben aplicarse estrictamente. Primero debe hacerse esta solicitud, que es la decisión legislativa de regular al agente encubierto como una herramienta de investigación. En este sentido, los legisladores deben lograr un equilibrio general, lo que se refleja en la definición del marco legal, especialmente en la definición de organizaciones criminales y tipos de delitos. Y el principio de subsidiariedad debe establecerse claramente, de modo que se prefieran las herramientas de investigación ordinarias, y debe discutirse el problema de que es imposible lograr el propósito de la investigación que no sea la penetración policial.

En segundo lugar, cuando el juez decide aprobar medidas de infiltración policial se debe adoptar la proporcionalidad, por lo que en el primer momento de la toma de decisiones se debe respetar el principio de subsidiariedad, rechazar la infiltración y dirigir la investigación a otros métodos medios lesivos. En tercer lugar, en todos los casos en que un agente encubierto debe solicitar una orden judicial, el juez debe aplicar el mismo principio porque esto constituye una restricción a los derechos fundamentales. Aunque la expresión es más complicada, el oficial encubierto debe ser consciente de que cuanto más se consideren estos dos principios en su investigación, más probable es que la información obtenida se convierta en prueba y tenga valor probatorio. (Guzmán, 2016).

Por esta razón, el art. 3 de la ordenanza sobre la difusión y el control de la propiedad delictiva y agentes encubiertos (aprobada por la resolución No. 729-2006-MP-FN del 15 de junio de 2006) indica que las técnicas especiales de investigación se llevan a cabo de conformidad al principio de subsidiariedad.

2.2.3. Actividades que realiza el agente especial

Cabe señalar que la fiscalía no intenta causar crímenes al infiltrarse el agente especial, ya que la medida se limita a verificar el desempeño de los investigados, recolectar evidencia de crímenes ya cometidos o por cometerse; o participar en actos de ejecución o agotamiento de ilícitos planeado por la organización criminal, haciéndose pasar como un miembro de (Molina, 2009).

También debe aclararse que, para la validez de la información recabada del agente encubierto, el fiscal debe verificar las actuaciones realizadas por el agente especial. Este objetivo se logra imponiendo la obligación de informar a las autoridades fiscales lo antes posible sobre las medidas de investigación tomadas en el contexto de la infiltración; para evitar cualquier conducta distinta a la especificada previamente por el fiscal, y para evitar el uso desproporcionado de este acto de investigación en particular, para llevar a cabo actos imprevistos o ser ordenado por el fiscal, pero otros.

Como señalamos anteriormente, los agentes especiales pueden realizar dos tipos de funciones: i) proporcionar información relevante para la investigación, y ii) realizar tareas de investigación. En el primer caso, tomamos como ejemplo al asistente jurisdiccional que brinda información en tiempo real sobre la salida del juez de su despacho, a efectos de concretizar una intervención policial al mencionado funcionario quien iba a recibir alguna dádiva por el quebrantamiento de sus funciones como juez.

En el segundo caso, encontramos la llamada actividad de infiltración, porque la aplicación de la segunda función en el programa encontró una serie de resistencias,

porque el legislador nacional no reglamentó estrictamente su uso, y no permite la exención de responsabilidad penal de agentes especiales.

Es decir, incluir en el ordenamiento penal una cláusula de exención de responsabilidad penal, genera una mayor protección al agente especial que está dentro de una organización criminal, pues, es inminente que por los objetivos de la investigación, este tenga que intervenir en actos ilícitos; de no regularse esta exención puede ocasionar la inoperatividad de esta técnica de investigación en las organizaciones criminales, generado que:

Una persona que pueda acogerse a ser un agente especial no acepte infiltrarse en una organización criminal; y, que la información obtenida sea inválida (Perez, 2013, p. 57)

Ahora, considerando la definición hasta ahora, continuaremos analizando la factibilidad de utilizar un agente especial como agente de infiltración y verificaremos si es legalmente factible en el marco del control legal y constitucional.

2.2.4. El agente especial y el ordenamiento jurídico nacional

La identidad del agente secreto puede mantenerse en secreto hasta el final de la investigación. Sin embargo, mediante una resolución judicial debidamente motivada, es posible mantener en reserva la identidad del agente, siempre y cuando se justifique que de develarse la misma pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del funcionario o particular encubierto o agente.

En este caso, si las medidas de instrucción pueden afectar derechos fundamentales, se debe solicitar al juez de instrucción que lo haga. Este programa está especialmente reservado [...].

El 30 de diciembre de 2016, el D. Leg. N° 1307 en su art. 2 introduce el número 7 en el art. Artículo 341 del CPP:

Artículo 341 CPP

En los casos de faltas previstas en los artículos 382 a 401 del Código Penal, el fiscal podrá ordenar el nombramiento de funcionarios, empleados y personas como agentes especiales. De hecho, si está involucrado en una investigación de un delito, el fiscal debe ordenar la protección adecuada. El agente especial debe tener cuidado de no cometer un delito. Tras el proceso de investigación especial, la acción debe ser aprobada por un juez penal competente.

2.2.5. Los agentes especiales y su atribución en los delitos

La participación de funcionarios, servidores e individuos con el propósito de participar en operaciones de intervención de delitos. Por lo tanto, podemos señalar provisionalmente que las reglas de procedimiento anteriores han otorgado al agente especial los siguientes poderes:

Reconoce la posibilidad de ocultar los datos de identidad del agente especial, siempre que el juez los apruebe, así como la seguridad personal a solicitud previa y razonada del fiscal de acuerdo con el riesgo procesal inherente y el riesgo para su propia integridad.

Reconoce la posibilidad de utilizar el agente especial y el agente secreto en investigaciones secretas que podrían violar ciertos derechos fundamentales. Sin embargo, esto requiere autorización judicial expresa a este respecto y a solicitud del director de la investigación preliminar, en este caso el fiscal (Pérez, 2013).

2.3. Infiltración en las Organizaciones criminales

2.3.1. La infiltración como técnica de investigación

La infiltración es considerada como una de las técnicas más antiguas en donde a lo largo de la historia se ha podido ver su inclusión, tal es el caso de la biblia, la cual interpone el término infiltración dentro de uno de los pasajes bíblicos.

Pese a ello dentro del estado Romano, los primeros políticos ejercerían la infiltración a través de una red de vigilancias, en donde se les brindaba información acerca de las conspiraciones que se presentaban por la toma de poder dentro del imperio, es así que Cicerón conocido como uno de los grandes famosos de portavoz, se quejaba debido a que las cartas que él enviaba eran interceptadas, por lo que expresaba que no encontraba hasta el momento un mensaje fiel, ya que eran muchos los que le ganaban la tentación de poder leer la carta, pese a ello Julio Cesar, requirió que se aplicara una red de espías que lo mantengan información de aquellas personas que conspiraban en su contra, tal es así que con esta red de espías, logró determinar que el Senado quería acabar con su vida (Zúrich, 2013)

Conforme a lo mencionado se llega a reconocer que la infiltración no viene recién en estas épocas sino desde la antigua historia de la humanidad, pues pese a la evolución que da el mundo, se han presentado mayores técnicas de investigación las cuales se han ido perfeccionando con el transcurrir del tiempo en función a las necesidades que se requerían de acuerdo al caso, sin embargo, pese a la evolución siempre se ha mantenido el mismo fin que es el de obtener información basada en engaños.

En tal caso se comprende que la infiltración es una de las técnicas en donde se viola los secretos ya sea de una organización, de una empresa y sus fondos, o del entorno social, pues para poder llegar a obtener esta información lo que se busca es crear efectos de engaños basado en una identidad aparentemente real.

Por ende, autores como Gómez y Herrero (2020), determinan que la aplicación de la infiltración es un disfraz de la identidad verdadera en donde no se presenta una línea de confianzas leal, pues lo que se busca es poder llegar a cumplir con los intereses públicos o privados, para ello el agente tiene que actuar aparentando ser leal.

Esto también comprende que la aplicación de la infiltración se puede no solo dar a través de los intereses públicos sino también privados, por lo tanto, se concluye que puede existir una infiltración privada, en donde se busca información por intereses

personales, tal como es el caso cuando se contrata a personas especiales que puedan investigar sobre personas que han cometido delitos graves.

A su vez estos tipos de métodos de investigación son limitados frente a los métodos que aplican la policía nacional para poder indagar un crimen, pues ellos son personas especializadas que ayudan a intervenir para obtener información y evidencia directa sobre los delitos o las organizaciones complejas que forman una organización criminal, pues el actuar policial como agentes de infiltración versa sobre métodos especializados para poder encontrar o poder identificar a la persona involucrada en investigaciones penales, proporcionando evidencia del proceso y apoyando a las autoridades que tienen el mismo propósito.

Sin embargo, se puede establecer que, para poder aplicar una infiltración, se presentan diversos métodos de investigación los cuales los más comunes, son aquellos métodos que se basan en técnicas de investigación especializadas, como la información documental proporcionada por entidades públicas y privadas, la redacción de informes, la recepción de declaraciones, la producción de varios tipos de documentos, que se pueden utilizar en conjunto.

2.3.2. La infiltración y los agentes especiales

La infiltración implica ocultar la verdadera identidad para establecer una relación de confianza con el objetivo principal (también oculto) con el fin de obtener la información necesaria para satisfacer determinados intereses públicos y / o privados. La infiltración requiere un medio para lograr este objetivo. Debe ser una persona natural, e ingresar secretamente a la estructura de la organización que no es necesariamente sea delictiva, para poder recolectar datos relevantes relacionados con hechos de carácter oculto. El resultado de la infiltración puede satisfacer los intereses personales de los infiltrados, autoridades competentes, personas jurídicas y otras personas naturales que confíen la infiltración a un tercero (Gómez De Liaño, 2004).

En el área del procedimiento penal, esta es una operación secreta llevada a cabo por un agente encubierto y consiste en infiltrar al sujeto en una organización criminal que juega un papel que confunde a sus miembros y les permite obtener información para reunir evidencia de la organización bajo investigación, para evitar que cometan nuevos delitos, o incluso para desmantelarlo (Molina, 2009).

En este sentido, se puede suponer que existe infiltración semipública por dos razones. En primer lugar, porque el agente especial es un residente que está inmerso en organizaciones criminales o que, sin pertenecer a ella, por disposición fiscal se introduce en la administración pública. (Gómez De Liaño, 2004). En segundo lugar, para el propósito de las pruebas de información es el uso de beneficios públicos que se requiere en las investigaciones penales. (Gómez De Liaño, 2004).

El famoso orador Cicerón se quejaba a menudo de que sus cartas fueron interceptadas: "No puedo encontrar un mensajero fiel", le escribió a su amigo Atticus. "Muy pocas personas leen una carta como quieren". Julio César también estableció una red de espías para mantenerlo informado de las conspiraciones en su contra. De hecho, pudo haberse dado cuenta de que la conspiración del Senado acabó con su vida.

La gente se ha dado cuenta de que la tecnología de penetración es tan larga como la historia de la humanidad y se refleja de acuerdo con los antecedentes y necesidades de cada época, por lo que es obvio que la humanidad avanza y la civilización también. Desde la operación hasta la tecnología, la tecnología también se ha desarrollado y mejorado, porque en la era romana antigua actual, la penetración ha sido diferente hoy, es aquí cuando la tecnología ha avanzado mucho. Sin embargo, en todos estos periodos siempre se ha mantenido el mismo objetivo: obtener información confidencial a través de una relación de confianza engañosa.

La infiltración es la técnica de penetrar o penetrar secretamente una parte, un territorio, una organización, una empresa, un entorno social, etc. para obtener

información confidencial, estableciendo confianza basada en el engaño, lo mismo que recae en la identidad real o verdadera del infiltrado.

En el diccionario de la Real Academia Española, el proceso de infiltración se define habitualmente como "invasión: ocupar en secreto su lugar en un territorio ocupado por el enemigo" o "entrar en un partido político".

Negocios, redes sociales, etc. con fines de espionaje, propaganda o sabotaje. Esta definición tan generalizada no aclara completamente el significado del número "agente secreto o secreto", ni siquiera aclara el procedimiento de investigación llamado "secreto". Como punto de partida, también debemos considerar nuestra Corte Constitucional es el agente secreto o secreto que ha seleccionado y capacitado a una persona que, con una supuesta identidad [que pretende ser un criminal], se infiltra o ingresa en una organización criminal por disposición de la autoridad competente en el propósito de proporcionar información [privilegiada] que permita a los miembros ser procesados, de los cuales están hechos, y como hay crímenes que solo pueden ser descubiertos y probados si los organismos responsables de la investigación son aprobados en el círculo donde tener lugar, es necesario usarlos para que se conviertan en secreto [como otro miembro] en el corazón de esta asociación criminal presentada para proporcionar información sobre sus miembros [desde adentro] Operación y financiamiento El "Agente especial" es una práctica estatal entendida en particular en el campo del crimen organizado para luchar contra las mafias del narcotráfico y las organizaciones subversivas.

2.3.3. Las técnicas especiales de investigación

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), ratificada por el Estado peruano el 19 de noviembre de 2001, establece que cada Estado parte, a su discreción, tomará las medidas necesarias para resolver una objeción a la entrega vigilada. Y el uso de otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica,

operaciones encubiertas, entre otras, para combatir la delincuencia de manera efectiva, según lo dispuesto en el artículo 20 (1).

Estas son técnicas especiales que permiten al estado introducir secretamente a un investigador criminal en la organización criminal, o permitir que ciertos activos criminales o envíos ilegales circulen, salgan o ingresen a la agencia o sus representantes. sin interferencia estatal reconocer a los miembros de la organización criminal; Cabe señalar que estas técnicas de investigación son especiales porque el crimen organizado no podría combatirse sin ellas y que son técnicas de investigación utilizadas por el estado para investigar los delitos cometidos por estas organizaciones. Además, estas son técnicas subsidiarias o excepcionales, ya que solo deben usarse si otras técnicas de investigación (que afectan los derechos fundamentales de los sujetos bajo investigación de una manera menos invasiva o intrusiva) pueden obtener los mismos resultados para la investigación. Esto lleva a un importante análisis legal y judicial de estos instrumentos de investigación.

Estas técnicas especiales de investigación encubierta y entrega controlada están diseñadas para proporcionar información y elementos de la condena para ayudar a identificar o identificar a los involucrados en la comisión del delito, para proporcionar evidencia del juicio y para proporcionar ayuda extranjera. (Ministerio Público de Bolivia, 2009).

Las técnicas especiales de investigación se utilizan en una investigación de inteligencia, la misma que se desarrolla en la investigación preliminar por disposición y bajo control del fiscal provincial; por tanto, a excepción de la colaboración eficaz, no es posible que se lleven a cabo en la investigación preparatoria. El procedimiento de colaboración eficaz se puede iniciar en la investigación preliminar, la investigación preparatoria e incluso en la etapa de juicio o en la ejecución de la sentencia, siempre dentro de las garantías del debido proceso. (Cotrina, 2020)

El fiscal provincial, al iniciar la investigación preliminar contra una organización criminal, debe establecer si es necesario utilizar alguna técnica especial de

investigación o todas a la vez. Ello dependerá de la necesidad y el avance de la investigación; así, por ejemplo, en una investigación contra una organización criminal dedicada a la extorsión, el fiscal, por estrategia, puede decidir instaurar el procedimiento de agente encubierto. En este ejemplo, el agente encomendado le informa al fiscal que el cabecilla de la organización ha decidido reunirse con públicos para negociar su protección y facilidades para realizar sus ilícitas actividades, por lo que el fiscal, frente a esta información ordenará que se lleve a cabo la Ovisé, con la finalidad de que los agentes de inteligencia de la policía perennicen, ya sea con fotografías o videos, dichas reuniones. Paralelamente, podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria la interceptación de una o varias líneas telefónicas para obtener mayor información de dicha reunión. Además, si la investigación lo requiere, el fiscal en coordinación con el equipo policial de investigación podrá instaurar una operación encubierta o una remesa controlada. (Cotrina, 2020)

2.3.4. La capacidad de infiltración del agente especial en las organizaciones criminales y la habilitación de la exención de la responsabilidad penal.

Aunque a primera vista, parece que solo la policía puede realizar operaciones encubiertas porque están adecuadamente preparados, ya que los agentes encubiertos a menudo están expuestos a amenazas que amenazan su propia existencia (Vicoli y Biral, 2006).

Debemos recordar que esto no excluye a agentes especiales del trabajo encubierto, siempre que esta actividad implique una participación particularmente definida y limitada en acciones que no presentan un alto riesgo.

Como muestra el análisis dogmático, las actividades de infiltración de personal especial deben tener las siguientes propiedades especiales: control fiscal riguroso, duración y desplazamiento limitado de los actos de infiltración; y que no involucren peligro para su vida, integridad personal y familiar. De hecho, aunque los agentes

se encuentran en una posición privilegiada para realizar infiltraciones, estos no tienen la experiencia o preparación suficiente para afrontar circunstancias de alto riesgo para su integridad.

Un ejemplo que se puede tomar, es cuando un fiscal dispone que el agente especial se dirija en el punto del encuentro con la organización criminal, con el fin de concretar la entrega del dinero, pues para ello el agente tiene toda la seguridad de la policía nacional y del representante del Ministerio Público, para que el acto sea intervenido sin riesgo en la integridad de ninguno de los intervinientes.

Dicho esto, se comprende que la responsabilidad penal que puede acarrear el sujeto de las operaciones encubiertas, conviene aclarar que la inclusión de figuras encubiertas en la legislación no significa la introducción de figuras falsas como "agentes autorizados para cometer delitos", sino la aceptación de la policía necesaria para simular delitos cooperativos, es decir, actividades destinadas a engañar a las organizaciones criminales para exponer delitos que no involucran al funcionario.

El mismo Espinosa sostiene que la acción del agente infiltrado, en relación con los posibles actos criminales que el agente encubierto podría emprender para evaluar la exención debe cumplir con tres requisitos: primero, que es una consecuencia necesaria desarrollo de la investigación; segundo, que sea razonablemente proporcional al propósito de la investigación; y tercero, no constituya en una provocación para la comisión del delito. En principio, debe permitirse la regla general de que el agente encubierto esté exento de sanciones penales, ya sea porque cumplió un deber por orden legítima de la autoridad competente o porque en determinadas circunstancias de la investigación, actuó en estado de necesidad.

2.3.5. El delito de organización criminal (art. 317 del CP)

El delito de organización criminal fue previsto en el ordenamiento jurídico penal mediante la incorporación del art. 317 en el C.P., en virtud del art. 2 del D. Leg. N.º 1244, del 29 de octubre del 2016:

Artículo 317. La organización delictiva promueve, organiza, forma o integra una organización delictiva compuesta por tres o más personas de carácter estable, permanente o incierto, y distribuye diversas tareas o funciones orientadas al delito de manera organizada, coherente o coordinada. La organización será sancionada con prisión por no menos de ocho años, pero no más de 15 años y una multa de 185 a 365 días, y será inhabilitado de conformidad con el artículo 36, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 4, y párrafo 8. La pena será no menor de quince años ni mayor de veinte años, y se impondrá una multa de 180 a 365 días, y estará sujeta a lo siguiente: Inhabilita el párrafo del artículo 36, el párrafo 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:

Cuando el agente tenga la identidad del líder, jefe, financista o líder de la organización criminal. Circunstancias en las que cualquier miembro de una organización delictiva causa la muerte o lesiones graves a su integridad física y mental debido a la conducta delictiva de una organización delictiva.

En primer lugar, debemos señalar que los elementos típicos del delito de organización delictiva han sido claramente diseñados. Por tanto, una "organización delictiva" se considera un grupo estable (elemento temporal) compuesto por tres o más personas (elementos personales) que realizan diversas tareas o funciones, independientemente de su estructura y ámbito de actuación (elementos estructurales). Claramente existen o funcionan directamente de manera coordinada para cometer uno o más delitos graves (elemento teleológico).

Por ello, coincidimos en enfatizar que esta figura criminal debe ser explicada con base en los conceptos propuestos por el Centro para la Prevención Internacional del Delito (CICIP) y el Centro Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Delito y la Justicia (UNICRI). Considerando los elementos

estructurales que deben relacionarse con el crimen organizado, se pueden prever sus características:

a) La jerarquía estándar o tipología 1: Se refiere a una organización criminal con un nivel superior, en la que todo se gestiona según el plan y las reglas prescritas por el jefe.

b) La jerarquía regional o tipología 2: se refiere a las organizaciones criminales que, aunque están lideradas por un líder, están dispersas y tienen líderes en diferentes regiones. Sin embargo, están controlados por el mismo código y están en capas.

c) La agrupación jerárquica o tipología 3: se refiere a una organización delictiva que está compuesta por grupos involucrados en diferentes actividades delictivas y tiene su propio sistema jerárquico interno, pero junto con el propósito de definir actividades ilícitas, y se rige por el mismo código.

d) El grupo central o tipología 4: es un tipo representativo de estructura flexible, muy común en las organizaciones criminales modernas, se refiere a aquellas organizaciones que tienen un número reducido de miembros y comparten el control a través de relaciones horizontales. Sus miembros pueden ingresar o salir de la organización de acuerdo a sus necesidades, sin importar si sus actividades delictivas son individuales o pluridimensionales.

e) La red criminal o tipología 5: La excelencia organizativa flexible se ve complicada por las actividades altamente profesionales que realizan sus miembros. Tiene presentes algunas figuras clave, que no se consideran integrantes de ningún grupo delictivo que se incorpore a la organización, sino que están rodeadas de individuos que ayudan a llevar a cabo proyectos delictivos a través de una estructura no jerárquica. En este tipo de organización criminal, lo importante no es el individuo sino el proyecto criminal (Prado, 2008).

Por tanto, debemos señalar que las organizaciones delictivas constituyen una de las formas más integrales de agrupación delictiva, pues de acuerdo con la definición operativa planteada, la existencia de organizaciones delictivas requiere del

consenso de los siguientes elementos: a) El número mínimo de integrantes (tres o más personas), b) propósito criminal, c) estructura organizacional (clasificación rígida o flexible y división de roles), y d) larga duración.

2.3.6. La pertenencia a una organización criminal

El Acuerdo Plenario N.º 1-2019, f. j. n.º 43, señala lo siguiente:

Se fundamentan otros factores que inciden principalmente en las vías de evasión del imputado en una organización desleal, las posibles conexiones internacionales, las características personales del imputado, su capacidad organizativa y actuaciones en un marco organizado, etc. (Según: STCE 146/2001, 18 de junio) sobre la falta de causa raíz del imputado y las características específicas y personales del imputado. Este es el dato más utilizado, pues lógicamente se entiende lo contrario como: situación familiar, laboral, económica y patrimonial o una situación personal integral en términos de direcciones estables, además de su falta de antecedentes, esto reduce significativamente el riesgo de fuga; sin embargo, por otro lado, apuntan en sentido contrario a la situación del fugitivo, es decir, hay un precedente registrado o una fuga o intento de fuga, en donde se revela la falta de asistencia judicial, o la falta de asistencia a la fiscalía.

Al respecto, cabe apuntar, primero, que es un hecho que el análisis de la sustantividad del delito repercuta en el marco de la valoración del riesgo de fuga, siendo la pertenencia del imputado a una organización criminal un elemento que incide en el riesgo de fuga, dando cuenta de un fenómeno político-criminal que aparece tiempo atrás en el escenario de la ley penal, y que a raíz de los casos emblemáticos, nuestras sociedades dan cuenta de su empleo permanente por parte de los órganos de persecución penal (Cancio, 2008, p. 29), sea de manera independiente, en cuanto a la tipificación del art. 317 del CP, o invocando las diversas circunstancias de agravación que se regulan en el marco de los delitos convencionales, lo importante es establecer indicadores reales y no aparentes ni ficticios (por ejemplo: el sindicato se aprovechará de las estructuras y

ramificaciones de la organización con el exterior para fugarse y sustraerse de la justicia). Estos datos criminológicos conforme se explyea la Corte Suprema pueden ser explotados por el imputado para sustraerse de la acción de la justicia, sin embargo, sobre la base de todas las manifestaciones de los “arraigos” debidamente verificados, se puede constatar la poca o escasa probabilidad de que el imputado pretenda fugarse, los cuales deben ser analizados de manera objetiva y no de forma antojadiza y caprichosa, o con criterios carentes de toda razonabilidad (Peña, 2018).

Siguiendo este criterio, en el f. j. n.º 46 se sostiene:

Si bien se acepta en criminología que, en general, este peligro se da porque el crimen organizado debe facilitar la impunidad de sus integrantes, y no necesariamente requiere que el imputado actúe para evadirlo o esconderse, y obstaculizar las actividades probatorias descrito en la STCE 145-2001 y otros datos concurrentes el 18 de junio del 2001, superan las raíces familiares y su compromiso de no eludir la acción judicial, y las tratan como una presunción contra el imputado.

En la Cas. N.º 626-2013 Moquegua, f. j. n.º 57, se sostuvo lo siguiente:

La propiedad del acusado o su integración en organizaciones o pandillas delictivas es un criterio clave para la experiencia delictiva. Independientemente de si se trata de evasión o de obstrucción de pruebas, la experiencia delictiva conlleva graves riesgos procesales. Las estructuras organizadas (independientemente del nivel de la organización) tienden a producir estrategias y métodos que conducen a la fuga de pares y ayudan a obstaculizar la evidencia (amenaza, "compra", muerte de testigos, etc.), por lo que en algunos casos solo sanciones de severidad y el estándar son suficientes para implementar esta medida.

Se debe corroborar, conforme las diversas aristas que rodea el caso en particular, en primer lugar, que el imputado pertenece a una organización criminal; y segundo lugar, que está en posibilidad de servirse de los tentáculos de la misma para huir al exterior. De hecho, estando ante una imputación jurídico-penal de cierta gravedad antijurídica y enterado de que algunos miembros de la estructura criminal están pretendiendo acogerse a un proceso de colaboración eficaz de inminente delación

en su contra, el riesgo de fuga se incrementa de forma significativa. Finalmente, en el último párrafo del f. j. n.º 46 del A.P. N.º 1-2019 se indica lo siguiente:

En este punto, en primer lugar, la doctrina pertinente no autoriza la prisión preventiva únicamente por el hecho de que el imputado haya sido incorporado a una organización delictiva; en segundo lugar, se trata de una regla por supuesto de excepciones que restringen la aplicación, de las siguientes circunstancias: Cuando el imputado pertenece a una organización delictiva o es probable que se reintegre a la sociedad, el propio grupo delictivo es un medio por el cual la propia organización delictiva puede facilitar la evasión del imputado del procedimiento o incluso obstaculizar la investigación.

Se cree que pertenecer a un grupo organizado indica que el riesgo de fuga es mayor, pero visto desde la perspectiva correcta, esto se debe a las propias circunstancias personales del imputado, especialmente a su situación financiera y conexiones con otros países. Del mismo modo, por ejemplo, en el caso de emigrar desde el extranjero, pero esta situación no puede ser más adecuada, ni en ningún caso puede atribuirse a la falta de la procedencia del objeto en cuestión.

Por su parte, Paucar (2016) señala lo siguiente:

La aparición de organizaciones delictivas puede entrar en la etapa de consolidación, porque enfrentará un segundo desafío potencial, que es cooperar con otras organizaciones (a veces más pequeñas y otras más grandes) para resolver conjuntamente las limitaciones en ciertos mercados delictivos. Este es un segundo desafío potencial (tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico de órganos, extorsión, etc.), establecer su posición en determinadas instituciones de poder corrupto (delitos de influencia, tráfico, colusión, corrupción, etc.), o fortalecerlo como único representante de los servicios ilegales (escuchas, lavado de dinero, asesino, etc.) (p. 191).

Al respecto, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿el hecho de que un imputado registre varios viajes al extranjero lo hace potencialmente propenso a viajar? No necesariamente, pues se debe corroborar que esos viajes le permitieron establecer

contactos en el extranjero que le podrían sustraer de la acción de la justicia. Si esos viajes fuera del país forman parte de las actividades laborales propias del agente, no consideramos que puedan ser valorados positivamente como un probable riesgo de “fuga”.

En el f. j. n.º 36 de la Casación N.º 626-2013 Moquegua se sostiene lo siguiente:

Este elemento arraigado requiere una conexión permanente entre las personas y las cosas en un solo lugar. La Ley de Procedimiento Penal establece que las raíces del acusado en el país dependen de la residencia, la residencia habitual, la ubicación del hogar y el negocio o trabajo, y la salida permanente del país o de las instalaciones ocultas.

En tal sentido, debe establecerse la consolidación de un estado de cosas, en cuanto a todas las circunstancias que rodean la personalidad del agente, desde un plano personal, familiar y laboral, que de hecho pueda propiciarle instrumentos, medios y otros elementos para poder abandonar el país. En efecto, el f. j. n.º 40 señala lo siguiente:

La única circunstancia en la que no hay raíz en absoluto no da lugar a la prisión preventiva obligatoria (por ejemplo, la prisión preventiva no se implementará automáticamente como extranjero), Especialmente si hay otras personas que pueden lograr estos objetivos. Por lo tanto, este requisito debe considerarse junto con otros criterios para determinar el riesgo de fugas en ciertas situaciones.

Ninguno de los presupuestos materiales de la prisión preventiva puede provocar su aplicación judicial automática. La medida debe ser analizada según las características personales del imputado. Como bien se dice, si se trata de un imputado extranjero que de manera eventual (visita de vacaciones) comete un hecho punible en el país, es lógico que no tenga ni arraigo familiar ni laboral. Por tanto, debe analizarse los otros condicionamientos de la validez judicial de la prisión preventiva, siempre explorando si no se puede en estos casos dictar una medida coercitiva de menor intensidad lesiva (principio de necesidad).

Al respecto, en el f. j. n.º 22 del Exp. N.º 04780-2017-PHC/TC, Exp. N.º 00502-2018-PHC/TC (acumulado) Piura se señala:

El apego a la severidad de la pena y los signos de pertenencia a una organización delictiva son suficientes para justificar la orden de prisión preventiva, que vulnera los derechos básicos de presunción de inocencia y libertad personal. El tribunal sostuvo que pueden ser elementos de presuntos riesgos procesales (peligros de fuga u obstáculos probatorios), pero no son suficientes por sí mismos.

Acá no valen las presunciones ni las conjeturas, se requiere de elementos sostenibles en una sospecha, en datos ciertos, pero no probados, que en su conjunto puedan llegar a inferencias válidas y sustentables probatoriamente hablando.

2.3.7. La organización criminal

El concepto de criminalidad organizada es esencialmente criminológico o sociológico y engloba a distintas categorías o manifestaciones de fenómenos de criminalidad organizada. Aunque la doctrina suele abordar su estudio desde tres puntos de vista criminalística, criminológico y jurídico-penal, esta se define como un fenómeno criminal que presenta diversas estructuras y niveles de complejidad organizacional.

En ese sentido, De la Corte Ibáñez y Giménez-Salinas Framis aclaran de manera acertada que, al vincular el sustantivo crimen con el adjetivo de la organización, se proponen dos atributos que nada tienen que ver con una gran cantidad de delitos. Desde un principio, el significado del término "organizado" parece estar muy próximo al significado del plan. Por lo tanto, el crimen organizado debe distinguirse de otros actos delictivos espontáneos o delitos cometidos sin revisión previa en caso de una reacción impulsiva, como en los llamados "Crimen de pasión". Además, según la definición académica, una organización necesita coordinar a varias personas, lo que permite excluir una gran cantidad de delitos o delitos, especialmente todos los delitos que habitualmente o pueden ocurrir de forma individual.

Finalmente, a diferencia de otras expresiones utilizadas para identificar la forma de delito, el término "crimen organizado" no especifica un tipo específico de delito o acto ilegal (generalmente llamado robo o fraude), ni especifica un tipo específico de víctima (cuando hablamos de violencia de género o abuso infantil), podemos ver que el crimen organizado puede abarcar todo tipo de delitos y víctimas. Por tanto, “la delincuencia organizada no es un tipo específico de delincuencia, sino una forma de delincuencia (forma plural), que se caracteriza por dos condiciones: un cierto grado de planificación y la participación conjunta y coordinada de las personas”. Los autores de la delincuencia organizada debe ser parte de la organización. El término "organización" no se refiere a ningún individuo, sino a un tipo específico de asociación (De la Corte, 2010, pp. 18 y 19).

Al respecto, CORDINI señala que no existe un concepto unívoco de “delito de organización”, ya que dicho concepto puede significar “tanto el delito de pertenencia a una organización delictiva como a la ejecución concertada de varias personas de un delito característico de dicha modalidad delictiva” (CORDINI, 2017)

En ese orden de ideas, desde el punto de visto jurídico-penal, el art. 317 del CP, modificado por el art. 2 del D. Leg. N.º 1244, de 29 de octubre del 2016, tipifica y sanciona el delito de organización criminal, prescribiéndolo de la siguiente manera:

“El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1), 2), 4) y 8).”

En la doctrina comparada, Silva Sánchez indica lo siguiente:

La mayoría de la gente cree que la injusticia sistemática de las organizaciones criminales es una injusticia autónoma, independiente del delito específico que se

pretende cometer (y, en última instancia, cometer) a través de ella. Específicamente, es cierto que la existencia de organizaciones criminales como sistema injusto y como subsistema disfuncional del sistema social constituido por el Estado solo perjudicará la seguridad general y la paz pública. En base a esto, es cierto que los aportes institucionalizados de los miembros activos (y colaboradores) deben ser considerados básicamente desde la dimensión de su comportamiento funcional, la denominada "injusticia sistemática" (Silva, 2005, p. 218).

La Ley N° 30077 es la materialización de la tendencia legislativa comparada de varios países de nuestro entorno cultural, que como expresión de la política criminal de los Estados para hacer frente a la criminalidad organizada, han promulgado leyes especiales para combatir a este fenómeno criminógeno especialmente grave y globalizado, que amenaza gravemente a la seguridad ciudadana, la paz pública interna de los países, el normal desarrollo del mercado internacional, la democracia de los diferentes Estados, entre otros bienes jurídicos relevantes, como es por ejemplo, con la dación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada de los Estados Unidos Mexicanos (07/11/1996); la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de la República Bolivariana de Venezuela (26/10/2005); la Ley Contra la Delincuencia Organizada de Guatemala-Decreto Número 21-2006 (02/08/2006).

En ese sentido, la citada ley propone un concepto amplio de criminalidad organizada que tiene como elementos esenciales, lo siguiente: 1.- Que se trate de cualquier agrupación de tres o más personas; 2.- que exista un reparto de tareas o funciones; 3.- que se trate de cualquier tipo de estructura, 4.- que abarque cualquier ámbito de acción; 5.- que exista cierta permanencia en el tiempo; 6.- que tenga como finalidad la obtención de lucro, y 7.- que tenga como objeto o función, la comisión de uno o varios delitos graves, que se traduce por ejemplo, en la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, lavado de activos, entre otros delitos, todos ilícitos penales que persiguen o generan ingentes ganancias ilegales. Actividad criminal, que viene acompañada por la comisión de diversos actos de violencia física y/o psicológica en sus diversas formas de ilícitos penales, así como de actos de corrupción pública y/o privada; como delitos medios que garantizan la

obtención de las ganancias ilegales producidas por los delitos objeto de la organización y garantizan la supervivencia de la organización e impunidad de sus integrantes.

Sin embargo, debe quedar claro que la Ley N° 30077 no establece un tipo penal de organización criminal, como sí lo establece por ejemplo el Código Penal italiano, cuando tipifica el delito de asociación criminal de tipo mafioso, o cuando se regula el delito de asociación ilícita para delinquir (o integrancia a una organización criminal), previsto y sancionado en el artículo 317° del Código Penal vigente que resulta ser un tipo penal autónomo, de convergencia y de peligro abstracto.

La Ley 30077 establece una definición de criminalidad organizada de tipo descriptivo o funcional, para el cual establece las características materiales o requisitos que debe reunir este fenómeno criminal, y, por tanto, ha suprimido términos: “agrupación criminal”, “organización delictiva o banda”, “organización ilícita” y “asociación delictiva”; que venían configurando agravantes de diferentes tipos penales de la parte especial del Código Penal, y los ha reemplazado por criminalidad organizada.

En ese sentido, respecto a los elementos o características que debe reunir el fenómeno de la criminalidad organizada se tiene:

A. Que se trate de cualquier agrupación de tres o más personas

Este requisito o elemento esencial, leído desde una interpretación literal admite como lectura la existencia de cualquier agrupación de tres o más personas. Agrupación, que de acuerdo a uno de los significados que le atribuye el Diccionario de la lengua española (DRAE), se refiere a un “conjunto de persona sus organismos que se asocian con algún fin”. Este grupo de personas no puede ser menos de tres personas, van juntas con fines ilícitos, como obtener ganancias ilícitas mediante la comisión de diversos delitos graves. El objetivo final suele ser la obtención de ganancias ilícitas, y para ello utilizan otros fines directos, como proteger a sus miembros, formar alianzas con otros grupos o alcanzar cierto grado de poder.

El concepto de organización constituye el núcleo de los delitos injustos. En efecto, la asociación ilegal está lejos de ser un grupo humano o una simple forma digital, de esta forma basta con superponer una voluntad más o menos ordenada, sin pautas rectoras ni sentido final (Castillo, 2005, p. 68).

La ley habla de “cualquier agrupación” y no de “cualquier organización”, ante lo cual, como recuerda Castillo Alva, La doctrina y jurisprudencia comparada necesita distinguir entre asociaciones (u organizaciones) y grupos, esta diferencia no radica en una perspectiva cuantitativa, por ejemplo, en ambos casos se refiere a más o menos miembros, sino cualitativa. Están relacionados con la estructura de la asociación y el grado de organización. Aunque el grupo solo necesita varias personas que se reúnan temporal u ocasionalmente, y no tiene una estructura organizativa propia, la organización necesita mantenerse estable y duradera en el tiempo, con una estructura de división de funciones y un sistema de imposición de reglas que marque la relación de sus miembros.

El solo hecho de asociarse para perseguir fines no lucrativos es constitucional y legalmente valido porque se ajusta a lo que prescribe el artículo 2°.13 de la Constitución y el artículo 80° del Código Civil. Sin embargo, cuando varias personas se asocian para obtener ganancias ilegales, por medio de la comisión de delitos, se actúa fuera de todo derecho, es decir, la actuación se encuentra fuera de la constitución y la ley.

B. Que exista un reparto de roles o funciones

En una organización criminal, existe un reparto de tareas o funciones diferenciadas encaminadas a la realización del proyecto criminal, no importando si se trata de una estructura jerárquicamente organizada (vertical) u horizontal.

La división funcional conduce a la especialización o especialización de sus miembros o subsistemas y mejora la eficiencia de la organización.

C. Que se trate de cualquier tipo de estructura

La interpretación literal admitiría cualquier tipo de estructura, desde la más básica o elemental hasta la más compleja. Sin embargo, no podría admitirse una estructura menor a la de una banda criminal o asociación ilícita para delinquir; que de acuerdo a la definición establecida por nuestra Corte Suprema: “Una banda se refiere a la fusión de dos o más personas que han designado el propósito de cometer uno o más delitos, para lo cual se implementan y coordinan para asegurar el éxito de sus actividades delictivas, y señaló que así es. papel que debe desempeñar el propósito” (Reaño, 2002, p. 298). En ese sentido, precisa Zúñiga (2009), cuando nos referimos al crimen organizado, no solo será cualquier sociedad criminal, sino una organización criminal dedicada al comercio ilegal dedicada a ciertas características comerciales (p. 36). Sin embargo, el autor antes mencionado matiza, reconociendo que la estructura de una organización criminal puede variar desde estructuras simples hasta estructuras complejas. Mientras haya estructura, al menos tan simple como eso, estamos tratando con una organización criminal (Zúñiga, 2009, p. 270).

D. Que abarque cualquier ámbito de acción

Este requisito de carácter espacial está referido al ámbito geográfico de la acción criminógena de la organización criminal y tiene que ver con el mercado ilegal de venta de productos que la organización produce (por ejemplo, producción de alcaloide de cocaína, etc.) o ha robado (por ejemplo, robo de autos, etc.), y/o con la prestación de servicios (por ejemplo, lavado de activos por una organización externa, alquiler de pistoleros o choferes de otra organización, etc.). En ese, sentido, el ámbito puede ser local, regional, nacional, internacional o transnacional. Sin embargo, consideramos que el ámbito local es un indicativo que nos enfrentamos a una agrupación elemental o embrionaria sin capacidad de repercusión delictiva grave.

E. Que exista cierta permanencia en el tiempo

La permanencia en el tiempo es una de las principales características que debe reunir toda organización criminal y tiene que ver con la razón de ser o con la condición esencial de su creación, esto es, toda asociación se crea o constituye para

que pueda perdurar en el tiempo, y de esa manera, pueda tener la posibilidad cierta de desarrollar y ejecutar su proyecto criminal en busca de lograr obtener el fin perseguido.

En ese sentido, señalan Luís De la Corte (2010), "El establecimiento de una organización criminal es para mantener las operaciones y obtener ganancias durante mucho tiempo, o para mantener su existencia sin límite de tiempo, independientemente de los intereses personales y los cambios externos" (p. 26).

F. Que tenga como finalidad la obtención de lucro

Los delitos graves que la organización realiza como objeto o función de su actividad criminal, tienen como finalidad la obtención de ganancias o utilidades ilegales, para lo cual producen bienes o servicios ilegales, como la producción y venta de droga, la trata de personas, la inmigración ilegal, y/o la venta de bienes robados o adquiridos por medio de la extorsión, el secuestro, etc. En ese sentido, como bien señala Choclan (2001), "La investigación de la procedencia de los capitales, su seguimiento más allá de las fronteras nacionales de cada Estado, en un ámbito mundial, y la posibilidad de confiscación de los bienes allí donde se encuentren, constituyen actuales retos de la política criminal transnacional" (p. 22).

2.3.8. Organización criminal, en las limitaciones de sus características

Conforme al autor (Casas, 2017), debe abordarse al analizar el fenómeno jurídico-social del "crimen organizado" es la delimitación de las características inherentes e inherentes a este fenómeno; En consecuencia, actualmente hay una gran cantidad de listas sobre las características de este aspecto del crimen dogmático en la doctrina; que cada caracterización existente en la enseñanza contiene elementos ciertos y comunes.

Las realidades socialistas de cada organización criminal están determinadas por el hecho de que estos órganos de primera persona son parte de la toma de decisiones ilegales de estas organizaciones, en materias que quedan en materia de responsabilidad penal, lo que hace posible diferenciarlos de otras categorías. legal,

como el de esta organización. Los análisis son similares, similares a lo que se conoce como pandillas criminales, el acuerdo agravante entre dos o más personas para cometer crímenes, la paternidad y el concepto ahora desaparecido de asociación ilegal.

A pesar de las disposiciones de los párrafos anteriores, en particular y categóricamente, la Ley No. 30077, la ley contra el crimen organizado, establece en el Art. 2, párrafo 1, las seis peculiaridades que permiten establecer la presencia de una organización criminal:

"1) el elemento digital, 2) la distribución, 3) la estructura: cualquiera sea su estructura y alcance, 4) permanencia: de forma estable o indefinida, 5) el concierto, y 6) el número y la escala del crimen"

Para Jorge Chávez Cotrina, citando a García Collantes, las características que debe cumplir un grupo delincuencial para que se le considere una organización criminal son las siguientes:

- a) El tema activo implica el consenso de al menos tres personas. Es una estructura jerárquica.
- b) Existe una relación disciplinaria (proporcionada a otros participantes por los integrantes).
- c) Se dividen las actividades.
- d) Tiene la infraestructura para llevar a cabo planes criminales que no pueden ser ejecutados por otro tipo de grupos.
- e) La sostenibilidad de los miembros debe ser estable y poco confiable.
- f) El objetivo es la comisión de delitos que sean el resultado de un alto grado de consentimiento mutuo y decisión que difiera de los intereses personales de sus miembros. (Cotrina, 2020)

Asimismo, un estudio realizado para el Centro de Estudios de la Defensa Nacional de la Comunidad Europea (Framis) ha señalado que una organización criminal tiene las siguientes características:

- a) *La existencia de una organización.*- Las organizaciones criminales para cometer delitos requieren que exista un orden de las funciones de cada uno de sus miembros.
- b) *La provisión y suministro de servicios y bienes legales e ilegales.* Las organizaciones criminales tienen como objetivo principal suministrar mercancías ilícitas como droga o armas, pero ello no es incompatible para que, en algunas ocasiones y si las circunstancias lo requiera, puedan brindar algún tipo de servicios dentro del marco de la legalidad y de esta forma camuflar sus verdaderos negocios ilícitos.
- c) *La búsqueda de beneficio económico y el empleo de blanqueo de capitales.* Al dinero que obtienen ilícitamente tienen que darle apariencia de legalidad. Por ello, utilizan todas las modalidades posibles para insertarlo a la economía formal de los Estados.
- d) *Continuidad y tradición en el negocio.* Las organizaciones criminales no son parte de la categoría de los grupos que aparecen esporádicamente y planean acciones delictivas. En estas debe existir una vocación para desarrollar el negocio ilegal.
- e) *Utilización de la violencia hacia el interior y el exterior de las organizaciones.* La disciplina es algo fundamental dentro de las organizaciones criminales y para mantenerla usan la violencia contra sus propios miembros, pero también la utilizan cuando se enfrentan a otras organizaciones rivales o las autoridades que los persiguen. Es decir, la violencia es algo natural y tradicional en la vida de una empresa criminal, esta le sirve para sobrevivir y crecer dentro del mundo delictivo.

- f) *Utilización de formas de corrupción en el desarrollo del negocio criminal.* La corrupción es un instrumento del que sirven las organizaciones criminales para poder realizar sus actividades impunemente.
- g) *Confusión con empresas legales.* La creación de empresas legales como fachada para encubrir sus negocios ilícitos es otra de las características de las empresas criminales. Además, estas les sirven para lavar sus ganancias.

Al respecto, Jaime – Jiménez y Castro Moral señalan:

La elaboración de varios indicadores para este fin, por ejemplo, en la Unión Europea (ENCOLDE, 161/1994, Anexo C), permite la determinación errónea de la delincuencia organizada según once criterios, de los cuales deben ser seis. Se proporciona, incluidos los números obligatorios 1,5 y 11. (Jaime - Jiménez, 2010)

- 1) La Colaboración de más de dos personas.
- 2) La distribución de tareas.
- 3) Actuación continuada o por tiempo prolongado.
- 4) Utilización de formas de disciplina y control interno.
- 5) Sospecha de comisión de delitos graves.
- 6) Operatividad en el ámbito internacional.
- 7) Empleo de violencia u otras formas de intimidación.
- 8) Uso de estructuras de negocios o comerciales.
- 9) Actividad de lavado de capitales
- 10) Ejercicio de la influencia (políticos, medios de comunicación, etc.)
- 11) Búsqueda de beneficio o poder.

2.3.9. Bien Jurídico Protegido

La dificultad sobre la particular evidencia la existencia de diferentes posiciones en la doctrina al momento de identificar el bien jurídico protegido (Bustos, 1997, p.58) en el delito de organización criminal, o comúnmente llamado delito de asociación ilícita.

Clásicamente se ha sostenido que la determinación del objeto jurídico de la tutela penal en esta especie de delitos ha dado lugar a dificultades: hay quienes opinan que tales infracciones deben clasificarse tomando en cuenta el objeto jurídico tutelado en los delitos que los asociados pretenden cometer; otros opinan que el interés tutelado debe ser la paz pública, como sucede en el CP brasileño; hay quien sostiene que el interés de la tutela penal debe ser la tranquilidad pública; y finalmente, hay legislaciones, como la italiana, que las catalogan entre delitos que ofenden el orden público (Bernal, 1965, p.455).

Todo dependerá, por ello, en asumir que cada sistema jurídico adoptará un esquema de protección de bien jurídico diferente a partir de su marco normativo interno, pero que en líneas generales podrían tener quien sostiene que una teoría del "bien jurídico" en un Estado social y democrático de derecho ha de tomar en cuenta que tiene su origen en la base social y es el producto de los procesos interactivos que tiene lugar en su seno.

2.3.10. Inexistencia de bien jurídico propio

Se encuentran otras posturas aún más radicales, las cuales niegan la existencia de un bien jurídico propio en el delito de organización criminal, es decir, que los bienes jurídicos que protegería se encuentran ligados a las barreras de protección asumidas por cada delito cometido a través de la organización.

Según lo que se hace mención la existencia del delito se analiza a través de los intereses jurídicos propios, en donde de manera ilícita se participa delictivamente a través de organismos que no afectan al orden público ilícito, tranquilidad pública,

actos de colectividad o difusión o que ponen en peligro los derechos (Zuñiga, 2001, p.293).

No obstante ello, la proposición que cifra el objeto de protección en los intereses lesionados por los delitos perpetrados por la asociación criminal, debe ser rechazada porque este enfoque significa que el delito de organizaciones delictivas se ha diseñado como uno de los peligros abstractos, cuya composición no necesita darse cuenta ni siquiera iniciarse para ejecutar el delito planificado, sino que a tal efecto basta la pertenencia de los sujetos activos a la agrupación delictiva (Reaño, 2002, p.284). Se debe mencionar que estas posturas asumidas siguen en cierto modo la tesis de la peligrosidad de la organización, pues ésta obstruye el análisis de los bienes jurídicos comprometidos a través de la justificación del adelantamiento de la punibilidad, en otras palabras, dado que la peligrosidad justifica el adelantamiento previo a la lesión de cual un bien jurídico, pero, estos no existirían para el delito del artículo 317 del CP.

Bajo mi criterio resulta más acertada la tesis de la paz pública como bien jurídico protegido en el delito de organización criminal, por dos razones concretas:

A. La ubicación sistemática del artículo 317 del Código Penal peruano lo identifica claramente dentro del capítulo I "Delitos Contra la Paz Publica", y aunque este a su vez se encuentra comprendido en el Título XIV "Delitos contra la Tranquilidad Pública", es el bien jurídico que mejor se engarza con los fines de protección, en atención al principio de lesividad.

B. La Paz Publica se conecta más con más noción de entender el estado de cosas peligroso que representa la existencia de una organización criminal, a diferencia de la posición que asume que solo los bienes jurídicos de los delitos-fin son los que resultan vulnerados o comprometidos, lo cual dejaría sin contenido y bien jurídico al artículo 317 del CR. Por tal razón, el bien jurídico protegido "Paz Publica" encuentra un fundamento más coherente bajo un criterio político criminal razonable.

Pues bien, se debe empezar por indicar que el fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas no depende de su falta de capacidad de acción, por el contrario, depende en buena cuenta de la peligrosidad de su organización (García, 2012, p.974), concretamente una peligrosidad objetiva, la cual tiene como base un defecto de organización. Este defecto de organización puede presentar tres variantes. En primer lugar, se visualiza como una responsabilidad por imprudencia, es decir por no haber organizado adecuadamente su proceso de producción y afectar bienes jurídicos. En segundo lugar, como aquellas circunstancias donde no es posible identificar con claridad la responsabilidad individual de una persona concreta. En tercer lugar, la inviabilidad de establecer medidas preventivas tanto en forma dolosa como culposa.

2.3.11. De los delitos de asociación para delinquir a la participación en organización criminal de la administración pública.

En la actualidad lo tipificado con referencia a los delitos que son cometidos por organizaciones no genera una noticia novedosa, ya que a nivel nacional e internacional se puede visualizar estos tipos de delitos que están en contra la cultura de cualquier estado, eso se puede analizar desde las primeras normatividades penales que regían en cada estado con la finalidad erradicar y poder sancionar a los grupos que infringen las normas. Precisamente, cabe señalar que los cogidos y normativas que han surgido mediante el primer antecedente que era el Código Napoleónico del año 1810, donde indica que el art. 265 donde hablaba de las bandas armadas, pero con el pasar de los años se reformo como la asociación de malhechores, lo cual estas figuras fueron establecidas con el único fin de proteger y resguardar el estado liberal, frente a estos grupos que vulnerar los derechos de personas y la normatividad de un estado.

La conexión entre la política y el crimen organizado es real. La infiltración gubernamental del crimen organizado es una de las manifestaciones de esta relación

y se ha convertido en una preocupación creciente en los últimos años. Esta penetración del crimen organizado es posible debido a dos factores principales: primero, la debilidad del estado para frustrar este enfoque, y segundo, la existencia de políticos considerados inescrupulosos o funcionarios clasificados como corruptos y cuyo propósito es ganancia personal sobre el bien colectivo. El primer caso se refiere a cuestiones institucionales, donde las regulaciones y mecanismos bajo los cuales opera el aparato estatal están en el centro del curso. La segunda causa es un enfoque más crítico de la escena, que permite reconocer la relación entre el crimen organizado y la política por su manifestación más tangible y mejor conocida: la corrupción. La novena encuesta nacional sobre corrupción (2015) se realizó con la ayuda de Ipsos, Transparencia Internacional y Proética.

Una de las preguntas se refería a los principales problemas que enfrenta el país hoy, que han llevado al crimen, la corrupción y el uso de drogas. Sin embargo, cuando se trata de tratar y aclarar los principales problemas del aparato estatal o, en otras palabras, del estado peruano, la corrupción de los funcionarios y las autoridades es, con mucho, el principal problema, percibido en el estado peruano (61%). y muestra un aumento desde 2006 (49%). Esta perspectiva se aplica no solo a la capital del país (62%), sino que también es una atmósfera desarrollada de manera uniforme en su interior (61%), y este problema está respaldado por la ineficacia de los funcionarios y las autoridades (14%), falta de coordinación entre instituciones (10%), falta de recursos económicos (8%) y dinero ilegal que ingresa a la política (6%). Para Transparencia Internacional, la corrupción es un acto que no está de acuerdo con la ética y la moral y que es cometido por personas en posiciones de poder y que benefician o benefician a terceros, infringen los derechos de otros e impiden el desarrollo integral de la sociedad. Así mismo se señala que los actos de corrupción incluyen no solo a aquellos en el poder: burócratas políticos, sino también individuos, funcionarios y organizaciones criminales. En este sentido, la corrupción puede entenderse como un concepto multifacético, un sistema social, económico y político (Grupo de Trabajo contra la Corrupción, 2010). Este

fenómeno presupone una amplia gama de comportamientos⁹, así como diferentes niveles que permiten comprender las diferentes tipologías de este fenómeno social.

De acuerdo con las estadísticas realizadas por la FECOR, más de 90% de las investigaciones involucran a un funcionario público. En algunos de estas son los funcionarios públicos los que dirigían su propia organización criminal, para ello se valían de sus cargos, este es el caso del alcalde que usaba su cargo para usurpar terrenos, lotizarlos y venderlos a pobladores de bajos recursos a precios muy bajos, cuando estos últimos construían sus modestas moradas eran desalojados mediante el uso de violencia con la finalidad de revender estos lotes a un precio mayor. (Cotrina, 2020)

Las organizaciones criminales requieren de la comisión de delitos de corrupción para lograr sus objetivos ilícitos; en ese sentido, “el vínculo entre el crimen organizado y la corrupción en el país es innegable. Las diferentes formas de corrupción se basan en el uso de estructuras organizadas para infiltrarse en los sectores público y político para operar en un sistema de corrupción. (Comse cruzan el crimen organizado y la corrupción en Latinoamérica, 2014)

Toda organización criminal, para subsistir y lograr sus objetivos, requiere del apoyo de los funcionarios o servidores públicos. Este apoyo tiene dos finalidades: la primera, es para protegerse de la persecución de las autoridades, para ello se infiltran en la Policía Nacional, en la Fiscalía y en el Poder Judicial; y la segunda, es con el objetivo de facilitar el logro de sus actividades criminales dentro del aparato estatal, como lo es en los delitos de concusión o tráfico de influencias, sobre todo en las licitaciones públicas, donde se mueven millones de soles. (Cotrina, 2020)

2.3.12. Limitación de la función encubierta a casos de actividades propias de la delincuencia organizada

El artículo 341 del Código de Procedimiento Penal estipula que el fiscal considera el uso del agente sobre la base de la investigación, ya que debe demostrarse cómo,

por ejemplo, los delitos de corrupción o lavado de dinero son comprometido cuando se comete, teniendo en cuenta los requisitos de información sobre actividades como el crimen organizado. La naturaleza de los actos de corrupción casi siempre está involucrada en la comisión del delito, además, se tiene en cuenta que todos los empleados, contribuyentes como participantes, pueden actuar como agentes secretos para el apoyo a la investigación. (Heydegger, 2018)

Esto implica la necesidad de poder determinar cómo se comete un crimen organizado, de acuerdo con lo que la ley expresa en el artículo 317 del Código Penal, donde estipula que un grupo ilegal es un grupo formado por un grupo de dos personas o más que cometieron un crimen juntos.

2.3.13. Exención de Responsabilidad Penal.

La actividad de los agentes que realizan actos de infiltración en una organización criminal (agente encubierto y agente especial) está enfocado al descubrimiento de actividades delictivas y no a la realización o provocación de esta con el fin de obtener pruebas; en ese sentido, en principio, en estos será que los delitos que pueda cometer estos agentes infiltrados durante su investigación pueden encontrarse exentos de responsabilidad penal cuando se sujeta a dos límites: cuando la actividades delictiva es consecuencia necesaria de la investigación y proporcional con el objeto de la misma, así como en el supuesto de que el agente no haya provocado el delito (Montón García, 2016, pp. 274-275)

La regulación de la exención de responsabilidad recogido en el numeral 6 del artículo 341 del Nuevo Código Procesal Penal, se asemeja a la contenida en el punto 4 del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, según la cual: “el agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan provocación al delito”.

Para algunos autores, de acuerdo a los actos que desarrolle el agente especial durante la investigación, también podrá ser eximido la responsabilidad penal con

base en las reglas generales del Derecho Penal, las cuales están reguladas en el artículo 20 de la norma material. Por ejemplo, si el agente infiltrado realiza una serie de acciones enfocadas en evitar la consumación de un hecho punible o la supresión de la realización de una constante situación antijurídica, como el caso de proteger la vida o integridad física de personas, se podría aplicar en este caso la legítima defensa, la cual no está dentro del rango de acción del artículo 341, inciso 6 del Código Procesal Penal, sin embargo, sería perfectamente aplicable en el supuesto concreto.

El fundamento de la exclusión de la responsabilidad penal de los agentes infiltrados (agente especial y agente encubierto) es la causa de justificación consagrada en el artículo 20, inciso 8 del Código Penal, “el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo” (Ricardo A. Brousset Salas, 2020)

Cuando se ha comprobado que una determinada acción es típica y lesiona bienes jurídicos de relevancia penal, se ha de proceder a analizar si la conducta también resulta antijurídica, es decir, contraria al ordenamiento jurídico. Si no lo es, entonces será una conducta permisiva, no permitirá la sanción de otros sujetos como partícipes y tendrá como sustento una causa de justificación.

En determinadas circunstancias, el ordenamiento jurídico obliga a determinadas personas (funcionarios y servidores públicos) a cometer un acto u omisión que constituya un delito penal, o está autorizado a hacerlo sobre la base de un permiso que cumple con el principio de legalidad. Por esta razón, no pueden ser consideradas como antijurídicas, siempre y cuando se siga con máxima diligencia los presupuestos que regulan su aplicación, como medio de interdicción de la arbitrariedad (Peña Cabrera Freyre, 2015, pp. 775-776). A esto se le conoce como obrar por disposición de la ley.

Para invocar el artículo 20, inciso 8 del CP, ha de derivarse los requisitos de la misma regulación del artículo 341, inciso 6 del CPP, toda vez que el actuar delictivo ha de ser consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación,

guardando la debida proporcionalidad y sin mediar provocación del delito. Esto implica que no podrá vulnerar bienes jurídicos superiores a los de la conducta delictiva que se investiga, así como la no justificación en cuanto al atentado contra la vida e integridad de las personas. No obstante, esto será evaluado, caso por caso, por el órgano jurisdiccional encargado de controlar la legalidad de la medida, ya que podría darse el supuesto de una legítima defensa durante el desarrollo de sus actuaciones como agente encubierto. (Ricardo A. Brousset Salas, 2020)

En lo atinente, específicamente, al agente especial, si bien en nuestras normas procesales penales no se prevé, taxativamente, la exención de responsabilidad para sus actuaciones. Sin embargo, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se destaca que la exención de responsabilidad se extiende para cualquier agente infiltrado (agente encubierto y agente especial). Así, la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo Plenario N° 10-2019/ CIJ-116 del 10 de setiembre de 2019, fundamento jurídico 13 ha establecido que: En cuanto al agente encubierto, que al parecer se extiende al agente especial, se estipula que estará exento de responsabilidad por las acciones que sean necesarias como consecuencia del desarrollo de la investigación, siempre que sean proporcionales al propósito de la investigación, no es una clara provocación de un crimen.

CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS

3.1.1. Presentación de los resultados.

Tabla 1

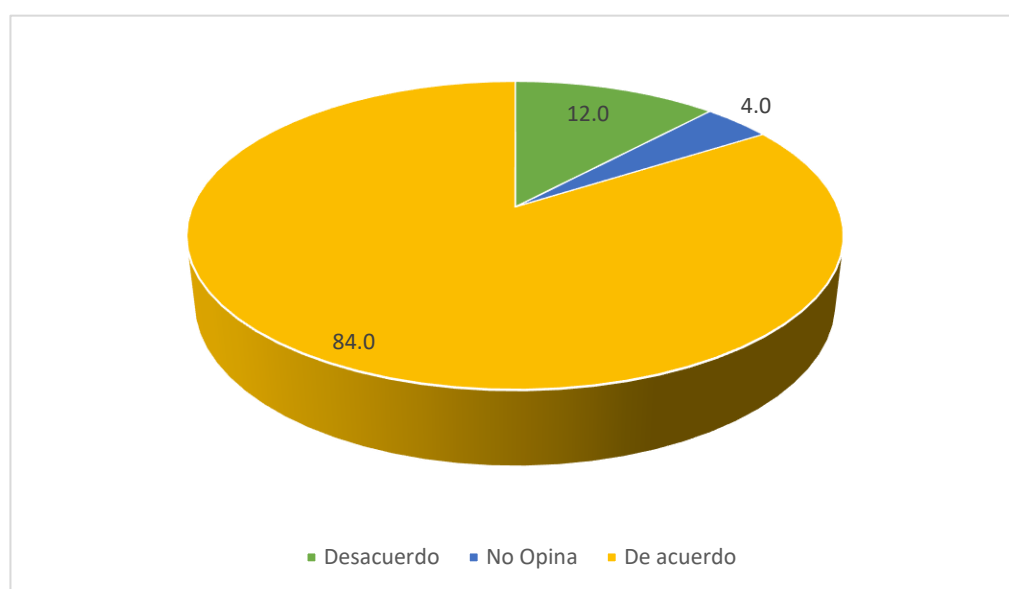
Agentes especiales.

ITEMS	N°	%
Desacuerdo	6	12.0
No Opina	2	4.0
De acuerdo	42	84.0

Total	50	100.0
-------	----	-------

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 1. Agentes especiales.



Nota: El 84% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron de acuerdo que existe una inoperatividad de los agentes especiales al realizar las labores de infiltración al interior de las organizaciones criminales, lo cual el otro 4% prefieren no emitir su opinión, mientras que el 12% de la población restante se encuentra en desacuerdo.

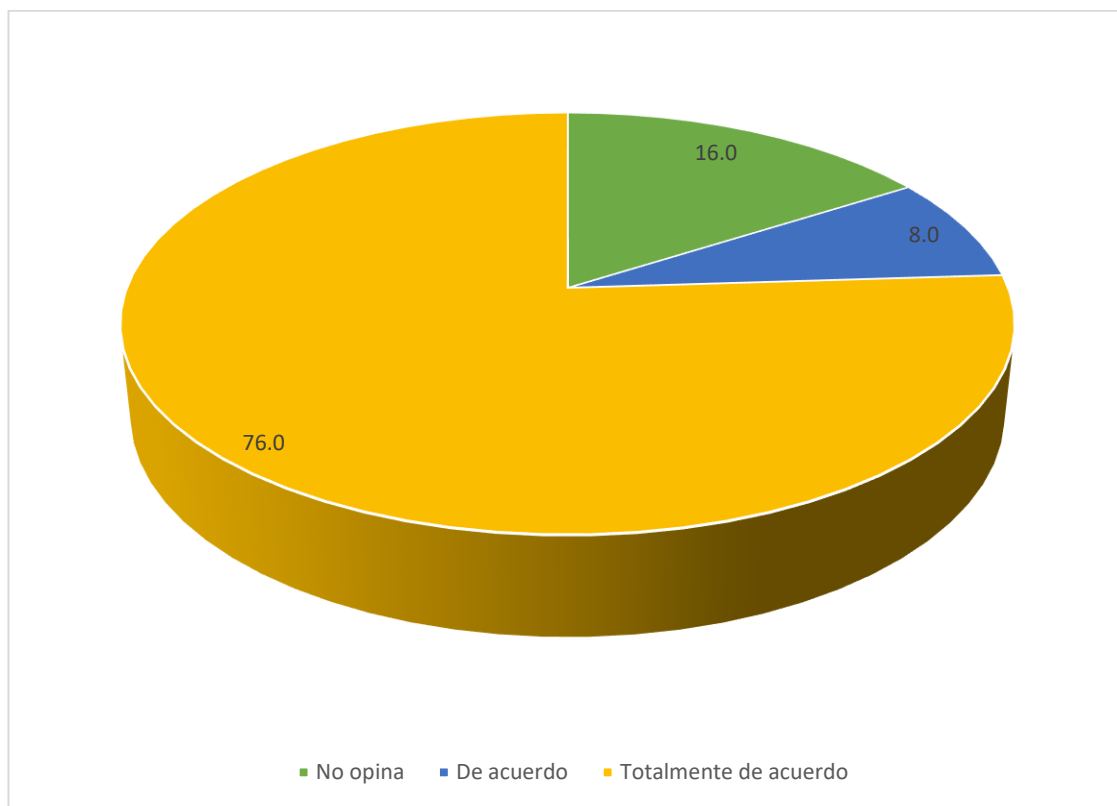
Tabla 2

Efectos jurídicos.

ITEMS	N°	%
No opina	8	16.0
De acuerdo	4	8.0
Totalmente de acuerdo	38	76.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 2. Efectos jurídicos.



Nota: El 76% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba determinar los efectos jurídicos que surgen por medio de la inoperatividad de los agentes especiales, así mismo el 8% se encuentran de acuerdo y por otra parte el 16% prefiere no emitir su opinión.

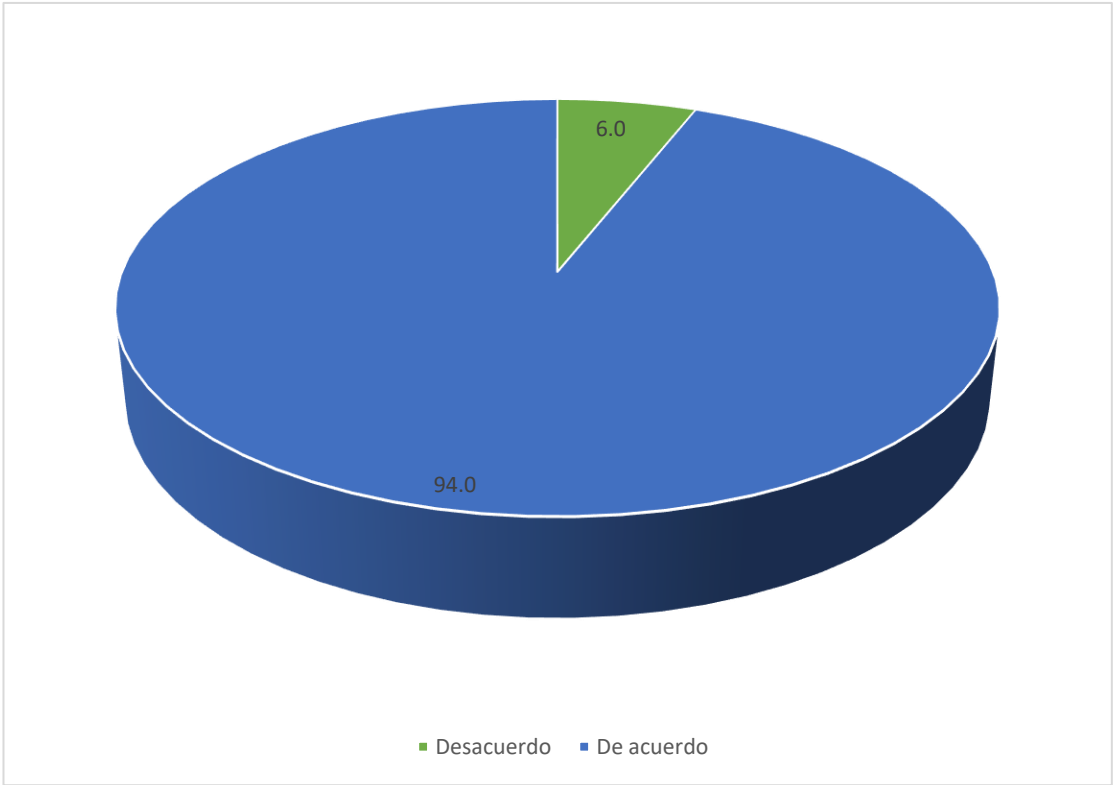
Tabla 3

Ejercicio de sus funciones.

ITEMS	N°	%
Desacuerdo	3	6.0
De acuerdo	47	94.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 3. Ejercicio de sus funciones.



Nota: El 94% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron de acuerdo que no se deba sancionar al agente especial por los actos cometidos en ejercicio de sus funciones y el 16% se encuentra en desacuerdo.

Tabla 4

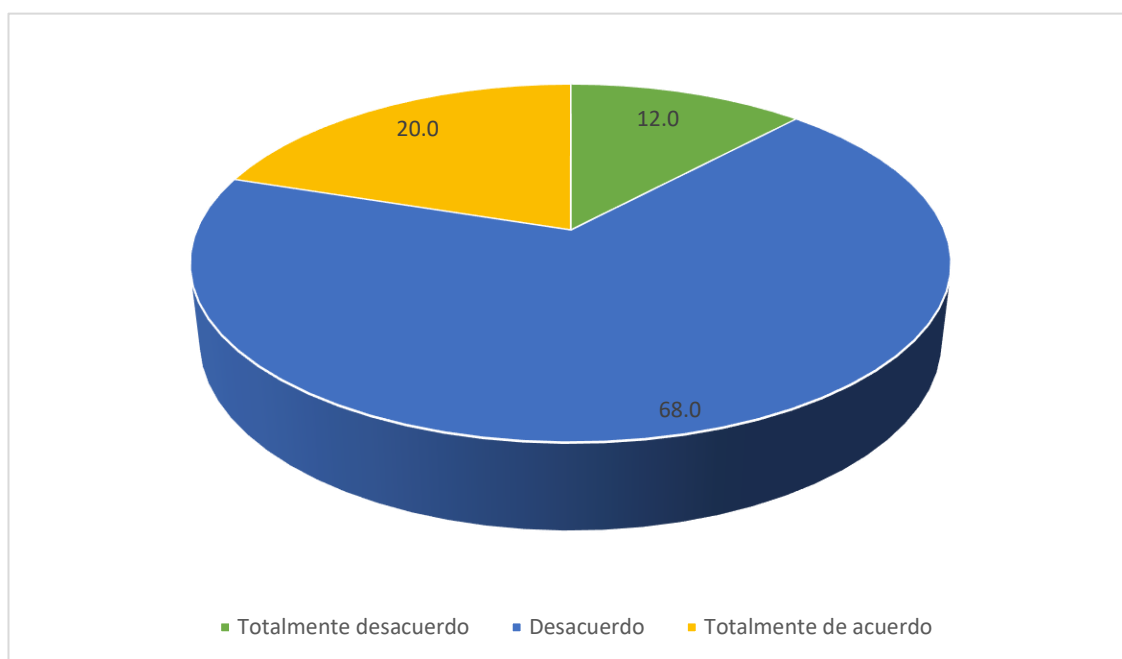
Excepción de la responsabilidad penal.

ITEMS	N°	%
Totalmente desacuerdo	6	12.0
Desacuerdo	34	68.0
Totalmente de acuerdo	10	20.0

Total	50	100.0
-------	----	-------

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 4. Excepción de la responsabilidad penal.



Nota: El 68% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron de acuerdo que deba existir una excepción de la responsabilidad penal de los agentes especializados contra los delitos de delincuencia organizada, el 20% se encuentra totalmente de acuerdo y el 12% se encuentran totalmente en desacuerdo.

Tabla 5

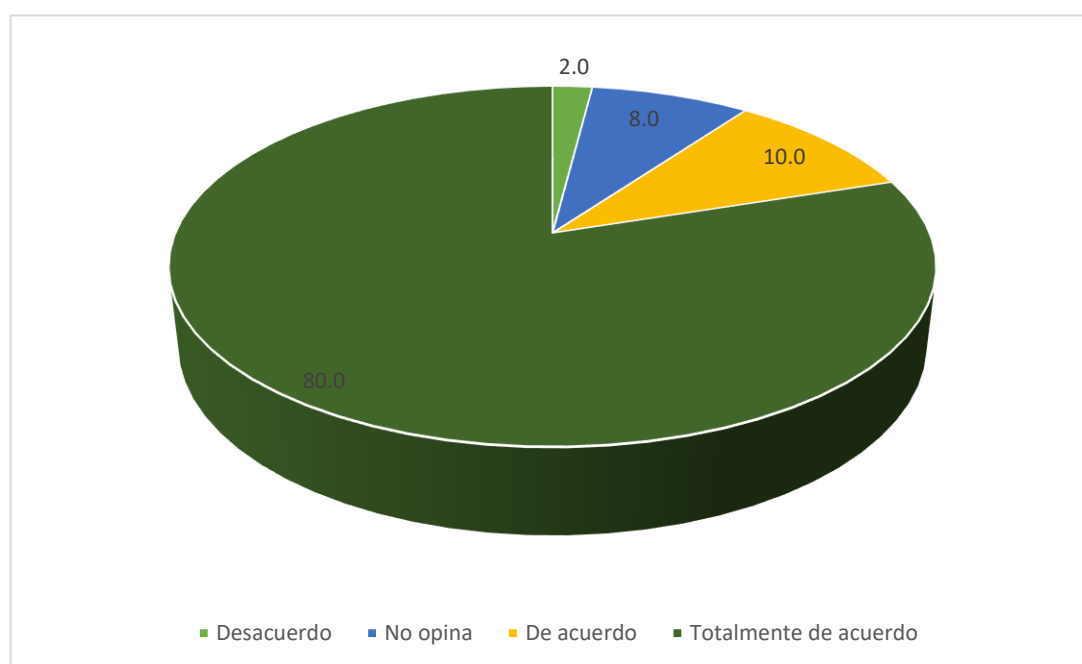
Inoperatividad de los agentes especiales.

ITEMS	N°	%
Desacuerdo	1	2.0
No opina	4	8.0
De acuerdo	5	10.0
Totalmente de acuerdo	40	80.0

Total	50	100.0
-------	----	-------

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 5. Inoperatividad de los agentes especiales.



Nota: El 80% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba analizar la doctrina, legislación y jurisprudencia para el mejoramiento de la inoperatividad de los agentes especiales, el 10% de igual manera se encuentra de acuerdo, el 8% prefieren no emitir su opinión, mientras que el 2% se encuentra en desacuerdo.

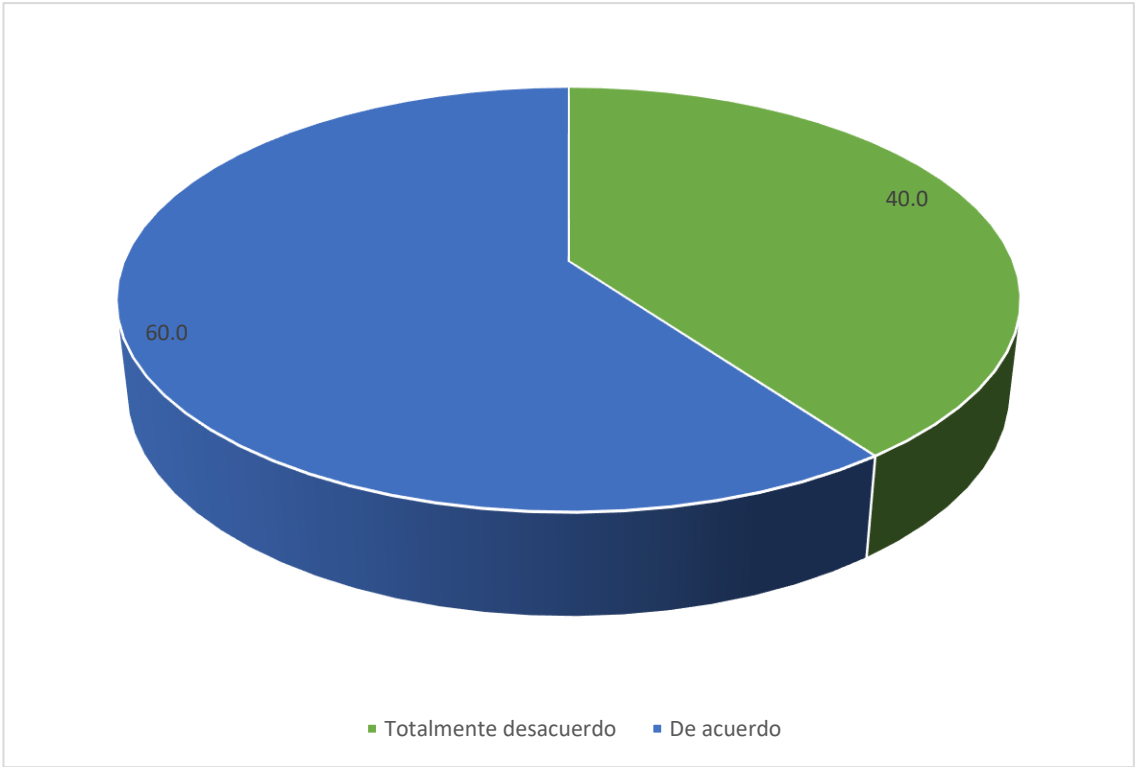
Tabla 6

Actuación de infiltración.

ITEMS	N°	%
Totalmente desacuerdo	20	40.0
De acuerdo	30	60.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 6. Actuación de infiltración.



Nota: El 60% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron de acuerdo que proponiendo una excepción de responsabilidad penal de los agentes especiales mejorara su actuación de infiltración, mientras por otra parte el 40% se encuentra totalmente en desacuerdo.

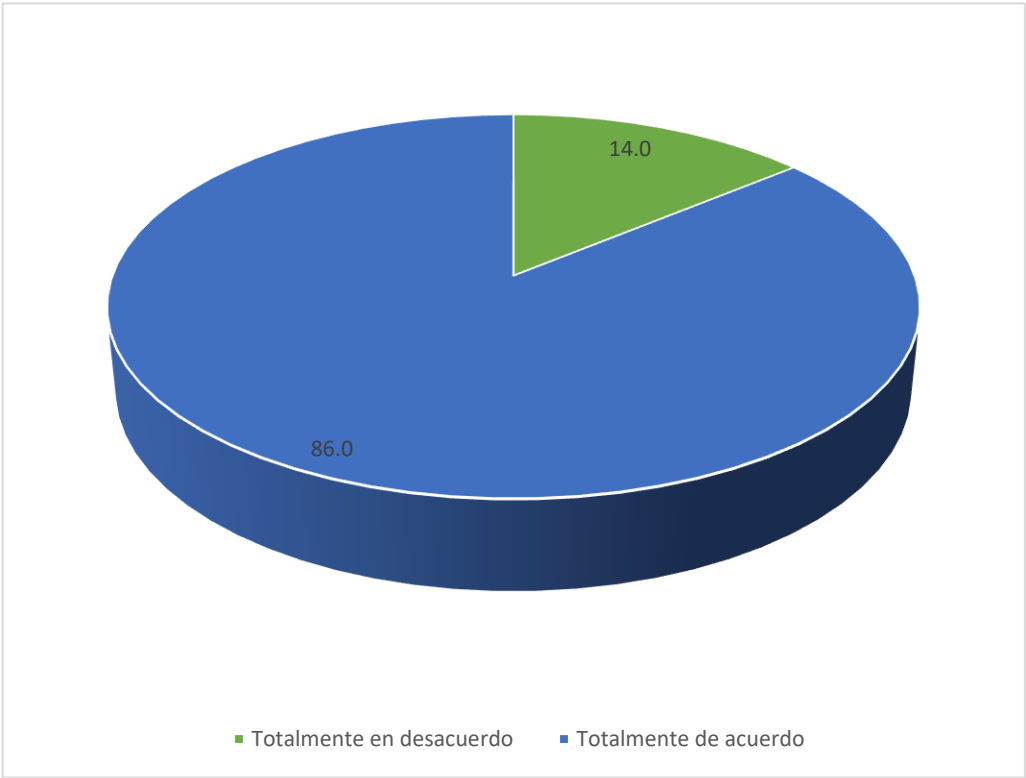
Tabla 7

Excepción de responsabilidad penal.

ITEMS	N°	%
Totalmente en desacuerdo	7	14.0
Totalmente de acuerdo	43	86.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 7. Excepción de responsabilidad penal.



Nota: El 86% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron totalmente de acuerdo que al no existir una excepción de responsabilidad penal de los agentes especializados se está poniendo en riesgo su vida, mientras que por otra parte el 30% se encuentra totalmente en desacuerdo.

Tabla 8

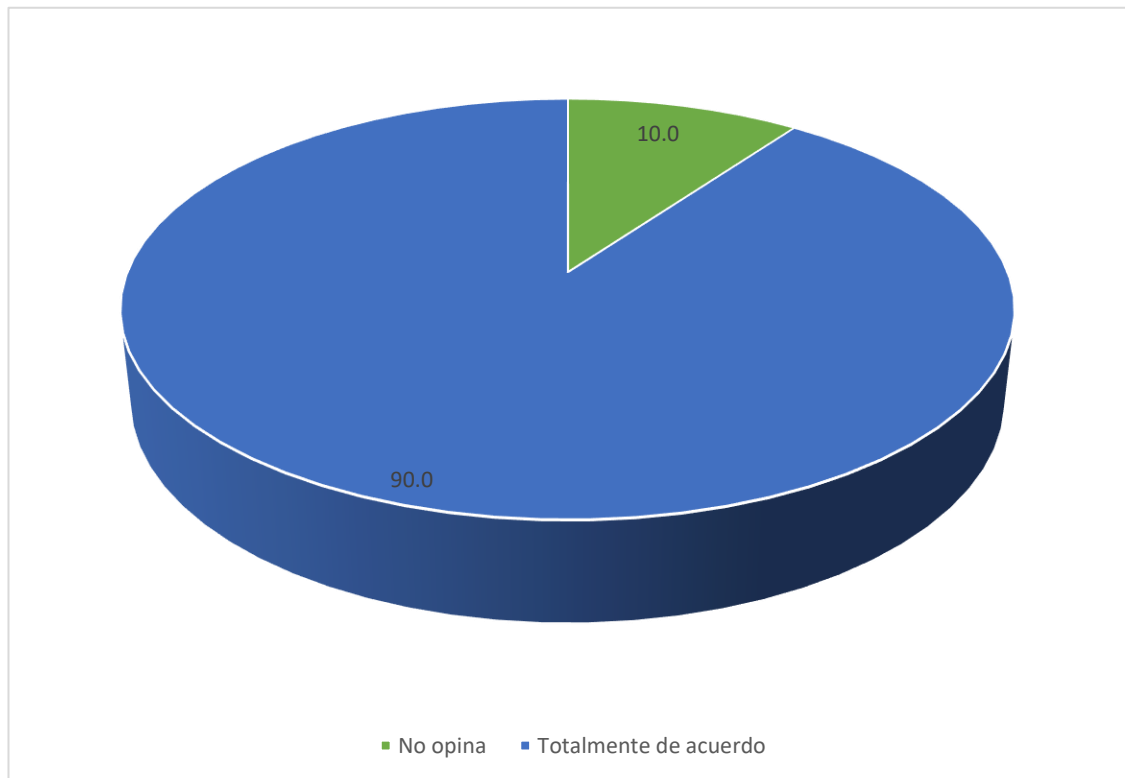
Desarticular las bandas criminales.

ITEMS	Nº	%
No opina	5	10.0
Totalmente de acuerdo	45	90.0

Total	50	100.0
-------	----	-------

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 8. Desarticular las bandas criminales.



Nota: El 90% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron totalmente de acuerdo que con la falta de una excepción de responsabilidad penal no se podrá desarticular las bandas criminales, lo cual el otro 10% de la población prefieren no brindar su opinión sobre el tema.

Tabla 9

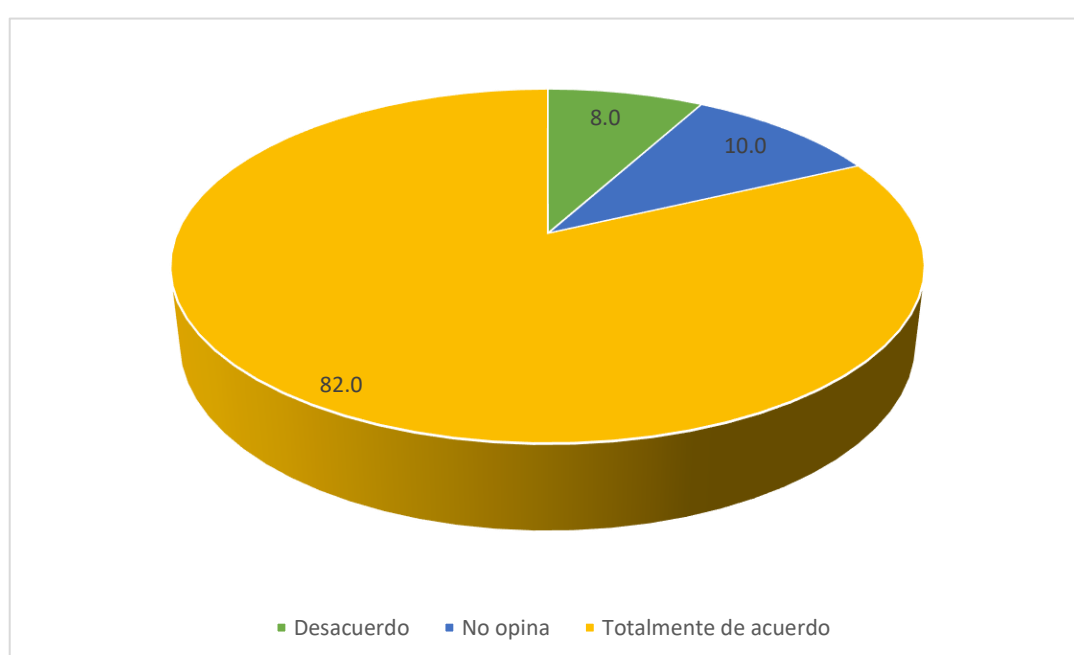
Conocimiento de las excepciones de responsabilidad.

ITEMS	N°	%
Desacuerdo	4	8.0

No opina	5	10.0
Totalmente de acuerdo	41	82.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 9. Conocimiento de las excepciones de responsabilidad.



Nota: El 82% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron totalmente de acuerdo que las bandas criminales tienen conocimiento de las excepciones de responsabilidad penal, el 10% prefieren no opinar, mientras que el 8.0 % de la población se encuentra en desacuerdo.

Tabla 10

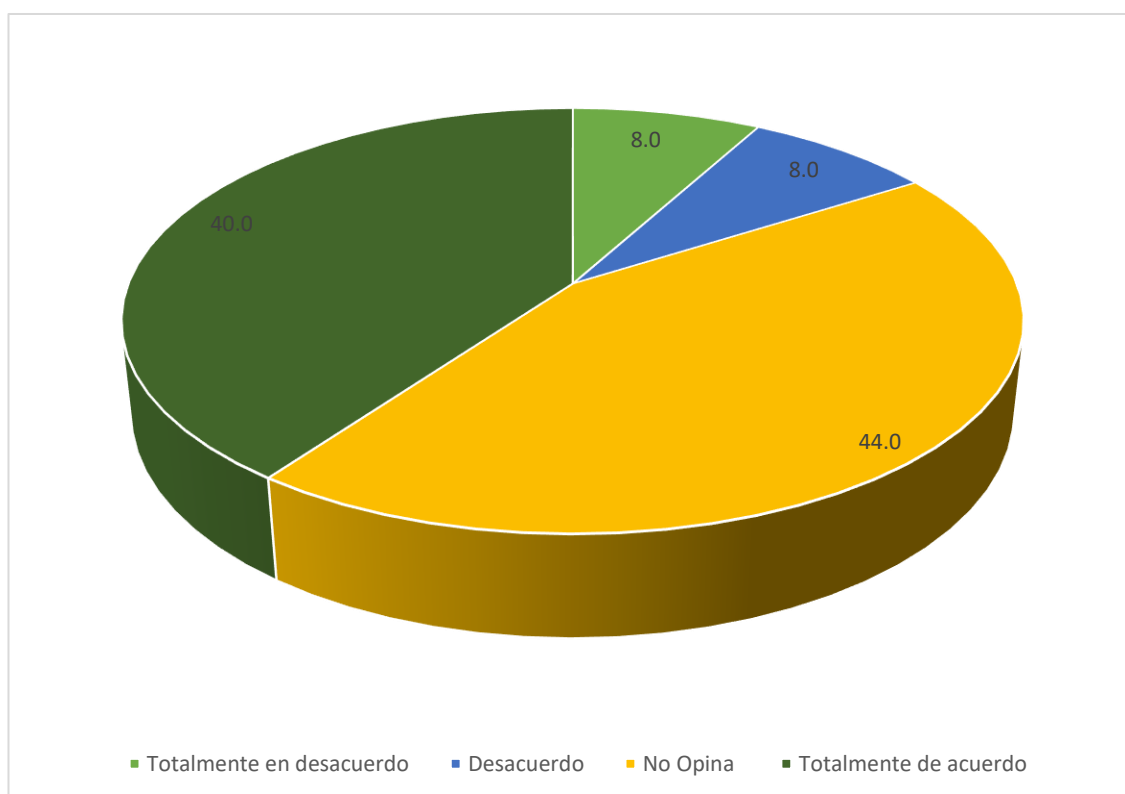
Nivel de responsabilidad penal.

ITEMS	Nº	%
Totalmente en desacuerdo	4	8.0

Desacuerdo	4	8.0
No Opina	22	44.0
Totalmente de acuerdo	20	40.0
Total	50	100.0

Nota: Encuesta aplicada a Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas.

Figura 10. Nivel de responsabilidad penal.



Nota: El 40% de Jueces especialistas en Derecho Penal, Fiscales, Abogados penalistas, se mostraron totalmente de acuerdo que se deba establecer un nivel de responsabilidad penal, el 44% prefieren no comentar sobre el tema, mientras que el 8.0% de la población se encuentra en desacuerdo y el 08% están totalmente en desacuerdo.

CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

De acuerdo al resultado obtenido en la tabla N° 1 señala un resultado de 84% especialistas encuestados se encuentran de acuerdo que existe una total inoperatividad por parte de los agentes especiales al realizar sus actuaciones de infiltración den las organizaciones criminales, sin embargo, existe un 12% de la población que se encuentra en desacuerdo. Teniendo como primer resultado es importante señalar que las personas encuestas se encuentran a favor de la tesis ya que consideran que existe una inoperatividad de los agentes.

Así mismo se respalda por lo investigado por Prado (2015) donde señala en su investigación que aún persiste los actos ilícitos cometidos por las organizaciones criminales por el tan solo hecho que el estado no respalda correctamente a sus agentes especiales en el cumplimiento de sus funciones, es por ello que considera que deba existir una reforma de las normas que regula sus actuaciones.

Al comparar los resultados obtenidos y lo investigado por el autor Prado se puede deducir que es cierto que la ineficacia o inoperatividad de los agentes especiales al ejecutar sus funciones de infiltrase es por el hecho de que estas personas consideran que no se encuentran respaldados las normatividades del estado peruano.

Es importante dar a conocer los resultados obtenido en la Tabla N° 2 donde el 76% de los especialistas encuestados manifestaron está totalmente de acuerdo en que es significativo determinar qué efectos jurídicos nacen por la existencia de la inoperatividad de los agentes especiales, de igual manera existe un 8% que están de acuerdo, por otra parte, existe un 16% que prefieren no manifestar su opinión.

De igual manera manifiesta Zamora (2017) en su investigación que concluye que al señalar los efectos jurídicos que nacen por la inoperatividad de los agentes especiales, se llegó a concluir que estas organizaciones criminales siguen realizando sus actuaciones ilegales, por el tan solo hecho de tener el conocimiento de que los agentes especiales se encuentran atados de mano por la normatividad peruana al realizar sus actuaciones de infiltración.

Al realizar el análisis de lo investigado por Zamora y los resultados obtenidos por la encuesta se puede determinar que se encuentra a favor de la tesis planteada, por

el tan solo echo de existir normas que restringen el actuar de los agentes especiales, sin embargo, es importante dar a conocer que las organizaciones criminales tienen el conocimiento de que el estado presentan normas que evitan realizar correctamente sus actuaciones los agentes especiales.

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla N° 3 existieron dos resultados, en donde el 94% de las personas encuestadas se encuentran de acuerdo con lo investigado en que no se deba sancionar al agente especial al realizar sus acciones de infiltración, sin embargo, por otra parte, el 16% consideran estar en desacuerdo. Estos resultados dan a conocer un favorecimiento al objetivo planteado en la investigación en que no se deba sancionar a los agentes especiales, sin embargo, un porcentaje menor consideran que las normas deben de ser igual y aplicables a cualquier persona del estado peruano.

Entonces al hacer mención lo investigado por Diban (2014) genera un respaldo al 16% de las personas que fueron encuestados y se encuentran en desacuerdo, concluyendo que dentro de los obstáculos jurídicos existente los agentes especiales deben saber infiltrarse cometiendo ciertos delitos dentro de los parámetros establecidos por la norma.

Es necesario analizar lo investigado por el autor Diban en su investigación, ya que con el pasar de los años las actuaciones de las organizaciones criminales han ido en aumento, y eso sucede por el tan solo hecho que los agentes especiales no pueden realizar sus actuaciones correctamente porque consideran estar atados de manos por las normas del estado peruano.

Conforme a los resultados establecidos en la Tabla N° 4 donde señala que el 68% de los especialistas se encuentran de acuerdo en que no deba existir una responsabilidad penal ante los agentes especiales en ejercicio de sus funciones, así mismo es importante resaltar el otro 20% ya que se encuentran totalmente de acuerdo, sin embargo, existe un 12% de encuestados que se encuentran totalmente en desacuerdo.

La investigación realizada por el autor Galindo (2013) donde concluye que a nivel internacional se debe ayudar los estados para que existe una correcta fortaleza de los agentes especiales, ya que consideran que las actuaciones individuales no van a

poder afrontar los problemas de las organizaciones criminales que son conocidas a nivel internacional.

Tomando en cuenta lo investigado por el autor Galindo donde manifiesta que es importante trabajar conjuntamente para que de esta manera se encuentre mejores resultados, así mismo de manera jurisprudencial se puede señalar que en otros estados a sus representantes que se infiltran en una organización criminal no son considerados culpables de sus actuaciones al cumplimiento de sus funciones.

II. CONCLUSIONES.

1. Mediante la responsabilidad penal existente en la legislación peruana se puede determinar que existe una inoperatividad por parte de los agentes especiales al cumplir sus labores que involucran infiltrarse en las organizaciones criminales, es por ello que los agentes al realizar sus actuaciones se encuentran reprimidos por la responsabilidad penal que pueda recaer hacia su persona.
2. El agente especial al realizar su función de infiltrarse en las organizaciones criminales tendrá la obligación de realizar actos ilícitos he ahí donde radica las circunstancias de inoperatividad del agente, siendo este el momento indicado para obtener resultados favorables para realizar correctamente desmantelo de las organizaciones criminales.
3. Tomando en cuenta el correcto análisis doctrinal, jurisprudencial y legislativo de los países de Estados Unidos y México se puede concluir que mediante la correcta actuación de los agentes especiales tomando en cuenta los actos ilícitos que dentro de sus funciones han cometido se ha logrado desmantelar organizaciones criminales en los distintos estados.
4. Se puede concluir que, mediante la mejora de los parámetros establecidos para las actuaciones de los agentes especiales, se lograra obtener resultados favorables tanto para el estado peruanos como para los agentes especializados en infiltración

III. RECOMENDACIONES.

1. Se recomienda que exista una excepción de responsabilidad penal a favor de los agentes especializados en infiltración en organizaciones criminales en ejercicio de sus funciones.
2. Se obtendrán mejores resultados a favor del estado peruano al brindar apoyos legales a favor de los agentes especializados.
3. El estado peruano debe implementar medidas a favor de los agentes especiales tomando en cuenta las legislaciones extranjeras.
4. Capacitación a los agentes especiales en las labores de infiltración en las organizaciones criminales.
5. Los operadores de justicia deberán analizar debidamente cada acción en concreto que realiza el agente especial en su labor de infiltración y aplicar la exención de responsabilidad penal.

BIBLIOGRAFÍA

- Boldova, P. (2017). *La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación ESPAÑOLA*. España: Universidad de Zaragoza.
- Casas, R. (2017). *Organización criminal y su deslinde con otras acepciones semejantes. A propósito del Decreto Legislativo N.º 1244*. Lima: Instituto Pacífico.
- Collantes, G. (2014). *Delimitación conceptual de la delincuencia organizada*. España: *Derecho y Cambio Social*.
- Cressey, D. (2013). *Criminal organization*. Nueva York: Harper & Row.
- Cubas, V. & Girao, I. M. (2016). *Los actos de investigación contra el crimen organizado*. Lima: Instituto pacífico.
- De La Cruz, O. (2017). *Crimen organizado. Delitos más frecuentes. Aspectos criminológicos y penales*. La Habana: Universidad de la Habana.
- De la cuesta, J. (2014). *Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho español*. España: Universidad de País Vasco.
- Diban, M. (2014). *Técnicas Especiales de Investigación*. Lima: cicad.
- Exp. N.º 3390-2005-HC/TC (Tribunal Constitucional 2005).
- EXP.Nº 04750-2007-PHC/TC, Nº 04750-2007-PHC/TC (Tribunal Constitucional 2007).
- Falcao, A. (2014). *Crimen organizado, terrorismo, lavado de dinero y derechos humanos*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- Fijnaut, C. & Letizia, P. (2014). *Organised Crime in Europe, Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and beyond*. Nueva York: Springer.
- Galindo, J. (2013). Galindo V. (2013), en su investigación *La estrategia mexicana contra el crimen organizado en el marco de las relaciones México – Estados Unidos*. Mexico: UNAM.
- Gálvez, V. (2017). *Medidas de coerción personales y reales en el proceso penal*. Lima: Ideas.
- Giménez, S. (2015). *La prevención situacional y la criminalidad organizada: una conjunción problemática*. Madrid: Dykinson.
- Guzmán, F. (2016). *El agente encubierto y las garantías del proceso penal*. Lima: Portal Iberoamericano de Ciencias Penales.

- Herrera, V. E. (2013). *El delito de asociación para delinquir*. Lima: El Peruano.
- Heydegger, F. (2018). *Código Penal & Nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Instituto Pacífico.
- Hurtado, P. (2016). *El sistema de control penal*. Lima: Instituto Pacífico.
- Jiménez, C. (2017). *Una defensa utilitarista al derecho penal del enemigo en casos de criminalidad organizada*. Lima: Actualidad Penal.
- Martínez, R. (2015). *Estrategias multidisciplinarias de seguridad para prevenir el crimen organizado*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Ministerio Público de Bolivia. (2009). *Manual de técnicas especiales de investigación agente encubierto y entrega vigilada de Bolivia*. Bolivia: Ministerio Público de Bolivia.
- Paucar, C. (2016). *El delito de organización criminal*. Lima: Ideas.
- Peña, C. (2016). *Sicariato y crimen organizado*. Lima: Ideas Soluciones.
- Peña, C. F. (2017). *El crimen organizado transnacional y las modificaciones legislativas en los delitos contra la tranquilidad pública*. Lima: Actualidad Penal.
- Pérez, A. (2013). *Criminalidad y delincuencia organizada en el nuevo proceso penal. Un aporte desde la criminología y la política criminal*. Lima: Gaceta Penal y Procesal Penal.
- Perez, A. M. (2014). *Criminalidad organizada. Análisis de la nueva Ley contra el Crimen Organizado (Ley N.º 30077)*. Lima: Actualidad Penal.
- Planchadell, G. (2016). *El agente encubierto en la lucha contra la criminalidad organizada*. Lima: Instituto Pacífico.
- Prado, S. (2015). *La criminalidad organizada en el Perú*. Lima: Conferencia Prado.
- Yshii, M. (2014). *“La Reforma Legislativa en el Derecho Penal con Aplicación en Casos Prácticos”*. Chiclayo: Minjus.
- Zaffaroni, E. (2013). *En torno al concepto de crimen organizado*. Buenos Aires: Depalma.
- Zafra, E. D. (2015). *La lucha contra el crimen organizado en el borrador del Código Procesal Penal: el agente encubierto*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Zamora, Z. J. (2017). *Técnicas especiales de investigación aplicadas al crimen organizado*. Chimbote: Ministerio Publico.

- Ziffer, P. S. (2014). *Lineamientos básicos del delito de asociación ilícita*. Buenos Aires: La Ley.
- Zúñiga, R. L. (2016). *El concepto de organización criminal de la Ley N.º 30077 sobre crimen organizado y el delito de asociación ilícita del art. 317 CP*. Lima: Instituto Pacífico.
- Zurcher, A. (2013). *El Imperio Romano a la NSA: la historia del espionaje internacional*. Londres: BBC Mundo.
- Bernal, J. (1965). *Delitos contra la Administración Pública y Asociación para delinquir*. Bogotá: Temis
- Bustos, J. (1997). *Lecciones de Derecho Penal*. Madrid: Trotta
- García, L. (2012). *Naturaleza jurídica de las llamadas consecuencias accesorias*. Lima: Universidad San Martín.
- Reaño, L. (2002). *Autoría y participación en delitos especiales de funcionarios públicos*. Lima: Juristas editores.
- Zuñiga, L. (2001). *Comentarios del artículo 317 del Código Penal*. Lima: Idemsa.
- Prado, V. (2008). *Sobre la criminalidad organizada en el Perú y el artículo 317 del Código Penal*, en Derecho Penal, Friburgo
- Cancio, M. y Silva J. (2008). *Delitos de organización*, Madrid: B de F
- Peña, A. (2018). *Derecho penal. Parte especial*, t. iv, 4.a ed., Lima: Idemsa
- Paucar, M. (2016). *El delito de organización criminal*, Lima: Ideas.
- De la Corte, L. (2010). *Crimen organizado. Evolución y claves de la delincuencia organizada*, Barcelona: Ariel
- Silva, J. (2005). ¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? *Del delito de ‘pertenencia a una organización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito*, en Los desafíos del derecho penal en el siglo xxi, Lima: ARA Editores.
- Castillo, J. (2005). *Asociación ilícita para delinquir*, Grijley, Lima
- Reaño, J. (2002). *Los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir: aspectos sustantivos y procesales*, Lima, Jurista
- Zúñiga, L. (2009). *Criminalidad organizada y sistema de derecho penal: contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal*, Granada, Comares.

Chavez, J. (2020). *El Crimen Organizado en el Perú*, Perú, Instituto Pacífico.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN
A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 03-2022-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de don: **Kevin Edmundo Manayalle Carrero**. Siendo las 11:00 a.m. del día jueves 13 de enero del 2022 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: “ **INOOPERATIVIDAD DEL AGENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LABORES DE INFILTRACIÓN AL INTERIOR DE ORGANIZACIONES CRIMINALES. CHICLAYO 2019**”, designados por Decreto N° 046-2020-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 28 de setiembre del 2020, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.

SECRETARIO : Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO.

VOCAL : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA

La tesis fue asesorada por Abog. CESAR VARGAS RODRÍGUEZ, nombrada por Decreto N°046-2020-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 28 de setiembre del 2020.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°006-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 07 de enero del 2022.

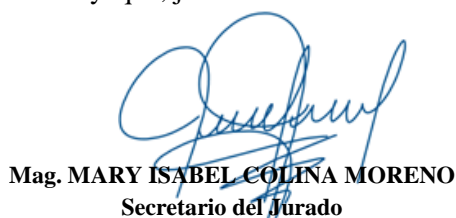
La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Kevin Edmundo Manayalle Carrero** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO con la nota de 17 (Diecisiete) en la escala vigesimal**, mención **de BUENO**.

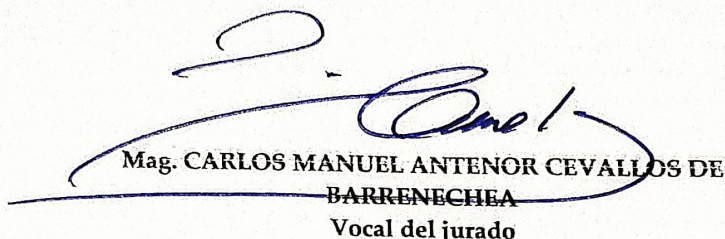
Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 12:05 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link: https://drive.google.com/file/d/1oX0_Vb78daHPk4obXYwZPM51wfBSUzs0/view?usp=share_link

Lambayeque, jueves 13 de enero del 2022

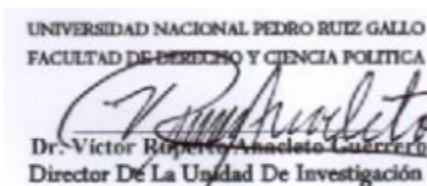

Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado


Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado


Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA
Vocal del jurado

Certificación: *El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 03-2022-UI-FDCP correspondiente a Kevin Edmundo Manayalle Carrero, evento que se ha realizado de manera virtual el día jueves 13 de enero del 2022 y aparece registrada en el archivo correspondiente.*

Lambayeque, 17 de abril del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

Dr. Victor Roberto Anacleto Guerrero
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRÍGUEZ, Asesor de Tesis de Bach. Kevin Edmundo Manayalle Carrero, titulada ***"INOPERATIVIDAD DEL AGENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LABORES DE INFILTRACIÓN AL INTERIOR DE ORGANIZACIONES CRIMINALES. CHICLAYO 2019"***, luego de la revisión exhaustiva del documento, constato que la misma tiene un índice de similitud de 17%(DIECISIETE%) verificable en el reporte de similitud del programa TURNITIN.

A las 12:00 PM del día 05 de julio del 2021

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 05 de julio del 2021



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 16484492
ASESOR

INOPERATIVIDAD DEL AGENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LABORES DE INFILTRACIÓN AL INTERIOR DE ORGANIZACIONES CRIMINALES CHICLAYO 2019

INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	16%	0%	7%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	core.ac.uk Fuente de Internet	6%
2	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante	2%
3	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	e-spacio.uned.es Fuente de Internet	<1%
6	qdoc.tips Fuente de Internet	<1%
7	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante	<1%


Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 16484422
ASESOR



Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Kevin Manayalle Carrero
Assignment title: REVISION DE TESIS
Submission title: INOPERATIVIDAD DEL AGENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LAB...
File name: INFORME_FINAL_DE_TESIS_JUNIO.doc
File size: 894K
Page count: 98
Word count: 19,973
Character count: 110,183
Submission date: 01-Jul-2021 02:19PM (UTC-0500)
Submission ID: 1614661191



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



INFORME DE TESIS

**INOPERATIVIDAD DEL AGENTE
ESPECIAL PARA REALIZAR LABORES DE
INFILTRACIÓN AL INTERIOR DE
ORGANIZACIONES CRIMINALES
CHICLAYO 2019**

ASESOR:

Dr. Cesar Vargas Rodríguez

PRESENTADO POR:

Bach. Kevin E. Manayalle Carrero

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
ABOGADO

LAMBAYEQUE, 2021


Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
D.N.I. 16484422
ASESOR